

UNO

IDEAS LLYC

EXPLORAR. INSPIRAR.



RECUPERAR PARA TRANSFORMAR
la **colaboración público-privada** en la **nueva economía**

IDEAS LLYC

IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de LLYC.

Porque asistimos a un nuevo guion macroeconómico y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.

IDEAS LLYC es una combinación global de relación e intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación, desde un posicionamiento independiente.

Porque la realidad no es blanca o negra, existe IDEAS LLYC.

UNO

UNO es una publicación de IDEAS LLYC dirigida a clientes, profesionales del sector, periodistas y líderes de opinión, en la que firmas invitadas de España, Portugal, América Latina y Estados Unidos junto con Socios y Directivos de LLYC, analizan temas relacionados con el mundo de la comunicación.

UNO

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
IDEAS LLYC

CONCEPTO GRÁFICO Y DISEÑO
AR Difusión

ILUSTRACIONES
Marisa Maestre

Madrid, mayo 2022

IDEAS LLYC no asume como suyas las opiniones vertidas en los artículos de los colaboradores habituales e invitados de UNO.

Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los textos e imágenes contenidos en este libro sin la autorización expresa de IDEAS LLYC.



SUMARIO

2022 nº 38

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | QUIÉNES son los COLABORADORES | 35 | UNO +1 Entrevista a Antón Costas por José Antonio Llorente |
| 9 | Una RECUPERACIÓN que nos HAGA más RESILIENTES | 40 | El PLAN de RECUPERACIÓN , una VISIÓN de FUTURO para la POLÍTICA INDUSTRIAL |
| 11 | RECUPERAR para TRANSFORMAR | 43 | Un SALTO en la TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA y DIGITAL |
| 15 | La CONVERGENCIA como OBJETIVO del PLAN de RECUPERACIÓN , TRANSFORMACIÓN y RESILIENCIA | 46 | LATINOAMÉRICA : una OPORTUNIDAD de ABORDAR una RECUPERACIÓN SOSTENIBLE e INCLUSIVA |
| 18 | Una COLABORACIÓN IMPRESCINDIBLE | 48 | AMÉRICA LATINA en un MUNDO POSCOVID |
| 21 | FEDERAR la RECUPERACIÓN | 51 | El POTENCIAL ARGENTINO para el DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE |
| 23 | El PODER y el IMPACTO de la POLÍTICA EUROPEA | 55 | Una RECUPERACIÓN ECONÓMICA SINUOSA : OPTIMISMO y AMENAZAS EXTERNAS |
| 27 | La COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA para la TRANSICIÓN ECOLÓGICA | 58 | ¿ CUÁL es tu MISIÓN ? |
| 30 | La moda ESPAÑOLA , los 'NEXT GENERATION' y la GUERRA | 61 | Premios Revista UNO |
| 33 | Los ESTADOS de DERECHO DEMOCRÁTICOS, SOCIALES y SEGUROS | 62 | LLYC |



llorenteycuenca.com
ideas.llorenteycuenca.com
revista-uno.com
ivoox.com/podcast-ideas-llyc

QUIÉNES son los COLABORADORES



Paloma Baena

Directora Senior de la Unidad Next Generation EU en LLYC. Es experta en sostenibilidad, gobernanza, digitalización y políticas públicas. Máster en Administración pública y desarrollo internacional por Harvard University. Licenciada en Derecho Internacional por l'Université d'Aix-Marseille III. Ha sido Senior Public Governance Specialist en el Banco Interamericano de Desarrollo, Deputy Division Chief en la OCDE, directora global de gobernanza en Save the Children international y VP de Alianzas Estratégicas y Policy de Clarity AI. Es miembro del consejo asesor de ADEVINTA Spain y patrona de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights. Es profesora adjunta en IE School of Global and Public Affairs. [\[España\]](#)



Joan Navarro

Socio y vicepresidente de Asuntos Públicos en LLYC. Sociólogo, profesor asociado de Ciencias Políticas y de la Administración en la UCM. Anteriormente fue director del gabinete del ministro de Administraciones Públicas (2004-2006). Es cofundador del foro +Democracia y autor de "Lobbying. Gestionar la influencia", "Comunicación Política" (Editorial Tecnos, 2016), "Desprivatizar los partidos" (Editorial Gedisa, 2019) y "La democracia en palabras" (Punto de vista Editorial, 2020). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, universidad por la que es experto en régimen jurídico y electoral de los partidos políticos, además de postgrado en Dirección General (PDG) por el IESE-Universidad de Navarra. [\[España\]](#)



Rafael Doménech

Responsable de Análisis Económico de BBVA Research y Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Ha sido director general en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia e investigador colaborador de la OCDE, Comisión Europea, Ministerio de Economía y Hacienda y de la Fundación Rafael del Pino. Es Miembro de Honor de la Asociación Española de Economía, vocal asesor de la Fundación MásHumano, miembro del Consejo Asesor del Instituto EY - Sagardoy Talento e Innovación, y director del Observatorio de Economía Global de la Escuela de Organización Industrial. [\[España\]](#)



Fátima Bañez

Presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. Ha sido ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto hasta noviembre de 2016. Diputada por Huelva en el Congreso de los Diputados (2000-2019). Presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019). Miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (1997-2000). Presidenta de la Fundación CEOE y consejera independiente de Laboratorios Roví. Miembro activo de diversas asociaciones y ONG; entre otras, Women Action Sustainability (WAS), que pretende impulsar el compromiso de las empresas, instituciones y sociedad con la sostenibilidad. [\[España\]](#)



Ximo Puig

Presidente de la Generalitat Valenciana. En 2011 fue elegido miembro del Congreso de los Diputados por el PSOE en la X legislatura por la circunscripción de Castellón. Ha sido portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. En 2014 fue elegido por los valencianos, militantes y simpatizantes, candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, en primarias abiertas. Se presentó a las elecciones autonómicas encabezando la lista del PSPV-PSOE por la provincia de Castellón, circunscripción por la que fue elegido diputado. Alcalde de Morella desde el año 1995 hasta el 2012. En el ámbito periodístico ha trabajado en el periódico Mediterráneo de Castellón, en la Agencia EFE, en Radio Popular y en Antena 3 Radio. [\[España\]](#)



Susana del Río Villar

Miembro del Comité de expertos independientes de la UE. Doctora en Ciencias Políticas. Premio Extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes, Salzburgo. Directora del Programa Integral Unión Europea de DBS. Directora del Grupo de expertos "Convención sobre el futuro de Europa"; Consejera Académica de Fide. Embajadora de la Paz por la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial. UE (WFPW). Autora de tres libros sobre política europea, Miembro del Comité de expertos independientes de la Comisión Europea. Profesora de UE en el Máster del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Columnista de El Correo. En la actualidad, en la Federación Vasca de Tenis es presidenta del Comité Mujer y Tenis. [\[España\]](#)



Joaquín Mollinedo

Director General Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca en Acciona. Se unió a Acciona en 2008; en 2011, fue nombrado director general de relaciones institucionales, encargándose de la regulación, relaciones institucionales y medios de comunicación a nivel corporativo. En 2016, empezó a encargarse, además, de los asuntos de marca a nivel corporativo. Jurista de formación, desempeñó cargos en la administración pública como letrado y secretario general de los parlamentos regionales de La Rioja y la Comunidad de Madrid, así como jefe de sección de estudios del Consejo General del Poder Judicial. Fue director de relaciones institucionales y regulación de Amena, empresa española de telecomunicaciones, y fue posteriormente nombrado secretario general de la compañía, una vez que ésta fue adquirida por France Telecom/Orange. Además, fue secretario general de Vocento. [\[España\]](#)



Adriana Domínguez

Presidenta Ejecutiva de Adolfo Domínguez. Licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas), por CESEM (Francia) y por el The Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York. Tiene el máster de Pensamiento en Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Habla cinco idiomas. Es presidenta ejecutiva de la firma de moda Adolfo Domínguez. En 2016 fue nombrada consejera de la empresa. En julio de 2017 el consejo de administración delegó en ella todos los poderes ejecutivos, primero como directora general, después como consejera delegada (julio 2019) y desde mayo de 2020 como presidenta ejecutiva. Desde enero de 2022 preside el Observatorio Textil y de la Moda de España, que reúne a todas las asociaciones y empresas del sector. [\[España\]](#)



Nuno Magalhães

Director de Contexto Político de LLYC Portugal. Fue secretario de Estado de Administración Interior entre 2002 y 2005. Posteriormente, fue diputado durante 14 años, ocho de ellos como presidente del grupo parlamentario CDS-PP. Además, formó parte de las comisiones parlamentarias de Economía, Innovación y Obras Públicas; Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías; Asuntos Exteriores y Comunidades Portuguesas y Asuntos Europeos. Licenciado en Derecho por la Universidad Lusíada de Lisboa, es abogado y profesor universitario. [\[Portugal\]](#)



Antón Costas

Presidente del Consejo Económico y Social de España. Ingeniero Técnico Industrial y Economista. Catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona. Autor de “El final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcione”, “La nueva piel del capitalismo”, “La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la crisis” y “La crisis de 2008: de la Economía a la Política y más allá”. Es columnista de los diarios El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. En la vertiente empresarial, es miembro de los Consejos de Administración de Laboratorios Reig-Jofre, Banco Mediolanum, Grupo Bodegas Terras Gauda y Barnaclinic. Pertenece también a los Consejos Asesores de Grupo Hotusa, Roca Junyent Abogados, Ingeus y Knowledge Sharing Network (KSNET). Además, ha sido Defensor del Cliente de Endesa (2000-2005) y Presidente del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña (2005-2012). En la vertiente institucional ha sido Presidente del Cercle d’Economia (2013-2016) y de la Fundación Cercle d’Economia (2018-2021). [España]



Raúl Blanco Díaz

Secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, profesor de Economía en el Centro de Estudios Internacionales, y Gerente de Estrategia Industrial en Dirección General de Industria en el Gobierno de Cataluña. Director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Actualmente es el Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. [España]



Paz Guzmán Caso de los Cobos

Consejera Económica en la Representación de la Comisión Europea y miembro de la Recovery and Resilience Task Force. Es experta en políticas públicas y desarrollo económico con más de 20 años de experiencia en los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Desde septiembre de 2015, es consejera económica de la Representación de la Comisión Europea en España y miembro de la Task Force de Recuperación y Resiliencia. Anteriormente, trabajó en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea y como economista de desarrollo para MIT (J-PAL), la cooperación belga y la Comisión Europea. Además, tiene un master en administración pública de la Universidad de Harvard. Realizó cursos de economía internacional a nivel de posgrado en la Université Libre de Bruxelles y tiene un título en administración y dirección de empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. [España]



Gema Sacristán

Directora General de Negocio y miembro del Comité de Dirección de BID Invest. Es responsable de las estrategias comerciales y de inversión así como de crear propuestas de valor para clientes y socios en el sector financiero, corporativo y de infraestructura y energía. Anteriormente fue la responsable de la División de Mercados Financieros del BID y formó parte del equipo que creó BID Invest. Antes de unirse al Grupo BID, trabajó 15 años en banca comercial y de inversión en Londres, Madrid y Nueva York. Forma parte del Consejo de Administración de la empresa Internet para Todos (IpT) y es miembro del Grupo de Expertos en Financiamiento de Comercio Exterior de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Gema ha sido reconocida como una de las cincuenta ejecutivas más destacadas de América Latina por la revista Latin Trade, es miembro del Young President’s Organization (YPO) y ha sido nombrada First Mover Fellow por el Instituto Aspen. [Estados Unidos]



José Ignacio López

Director general ejecutivo y jefe de Investigación Económica en Corficolombiana. Economista de la Universidad de Los Andes, con estudios de maestría y doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles. Se ha desempeñado como economista de ANIF, economista jefe del Banco Santander, Investigador visitante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, profesor de la escuela de negocios HEC Paris en Francia y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Es columnista del diario La República y autor de varios artículos publicados en revistas económicas especializadas. [Colombia]



Matías Kulfas

Ministro de Desarrollo Productivo de Argentina. Licenciado en Economía y magíster en Economía Política. Fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción (2006-2007), Director del Banco de la Nación Argentina (2008-2012) y Gerente General del Banco Central de la República Argentina (2012-2013). En 2014 fundó la consultora “Idear Desarrollo”. Desde diciembre de 2019 se desempeña a cargo de la cartera de Desarrollo Productivo, cuyas principales áreas de gestión son: Comercio Interior y Exterior, Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedurismo, Industria, Economía del Conocimiento y Minería. [Argentina]



Daniel Schteingart

Director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). Titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Argentina Productiva 2030. Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico de la Argentina”. Licenciado y doctor en Sociología, magíster en Sociología Económica. Entre 2012 y 2017, fue becario doctoral y posdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). A partir de 2020 se desempeña como Director Nacional de Estudios para la Producción (CEP XXI), cuyo objetivo es realizar análisis de coyuntura, estudios e investigaciones sobre la estructura productiva. Desde marzo de 2022, se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Argentina Productiva 2030”. [Argentina]



Andrea Villarreal

Directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). Máster en Administración Pública en Economía y Políticas Públicas por The London School of Economics and Political Science (LSE), Máster en Finanzas y Gestión de Riesgos en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), Especialista Superior en Finanzas (UASB) y es Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es Docente de Entorno Económico y Macroeconomía en el IDE Business School y Directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). [Ecuador]



Jordi Sevilla

Senior Advisor, Miembro del Consejo Asesor y Director del Área Contexto Económico en LLYC. Es experto en economía y política económica. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda (1993-1996), ministro de Administraciones Públicas (2004-2007), senior counselor de PwC (2009-2015), responsable del equipo económico del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016) y presidente de la Red Eléctrica de España (2018-2020). Además, ha sido profesor en el Instituto de Empresa (IE) y ha publicado numerosos libros sobre economía y política. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. [España]



Una **RECUPERACIÓN** que nos **HAGA** más **RESILIENTES**



José Antonio Llorente

Socio Fundador y Presidente de LLYC / Estados Unidos - España

La recuperación tras la pandemia es un enorme reto al que se enfrentan la mayor parte de las economías mundiales. El final de la fase más aguda de la COVID-19 ha coincidido, además, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha causado una devastación terrorífica y la muerte de decenas de miles de personas, así como efectos perniciosos en forma de inflación, escasez de materias primas y el agravamiento de la incertidumbre en los mercados globales.

A pesar de este lúgubre contexto bélico, que deseamos que termine cuanto antes, los planes para la recuperación económica, tras dos anómalos años de confinamientos y movimientos restringidos, permiten ver algunos de los caminos que se abren para las administraciones públicas, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto. En primer lugar, como detalla este número 38 de UNO, la Unión Europea ha desplegado una inusitada cantidad de herramientas destinadas no solo a estimular unas economías convulsas, sino a acelerar dos procesos que nuestra actividad precisa con urgencia: una transición verde y una digitalización profunda. El plan Next Generation EU, con sus más de 800 000 millones de euros de inversión, será clave para aumentar la resiliencia de unas economías necesitadas de un respaldo sólido que les permita llevar a cabo reformas e inversiones que de otro modo habrían sido difíciles de emprender. Porque nuestro contexto político es tan complejo como el económico. Necesitamos recuperarnos y, al mismo tiempo, transformarnos.

“El plan Next Generation EU, con sus más de 800 000 millones de euros de inversión, será clave para llevar a cabo reformas que de otro modo habrían sido difíciles de emprender”

Como cuenta en su artículo Jordi Sevilla, estas complejidades no las pueden resolver por sí solos ni los gobiernos nacionales ni las empresas: “hace falta encontrar nuevos protagonistas y diseñar nuevas formas de intervenir en lo social –dice Jordi– capaces de hacer frente a unos retos que son globales y transversales”. Estos requieren una nueva forma de cooperación entre lo público y lo privado, que va más allá de los viejos enfrentamientos entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Estas tres patas, que son clave para el funcionamiento de las economías y las democracias modernas, deben aprender a cooperar de maneras nuevas, para crear la mejor regulación posible, ordenar las necesidades sociales, organizar estrategias que aseguren el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad. Los asuntos públicos tendrán un importante papel de intermediación en esta nueva era. LLYC se ha puesto al día con la creación de una unidad de Proyectos Next Generation EU que, a sus actividades tradicionales de asuntos públicos, suma su comprensión del contexto con el fin

de alinear las prioridades de negocio de las empresas privadas nacionales con los planes de la Unión Europea, del Gobierno de España y la Agenda 2030.

Este número de UNO presta una atención especial a esta nueva era en la que se encuentran España y Europa y aún las percepciones que tienen de este proceso políticos y funcionarios con altas responsabilidades, empresarios y también los analistas y responsables de asuntos públicos de LLYC. Sin embargo, el proceso es global, por lo que también hemos querido ver cómo se desarrolla en otro espacio geográfico clave para LLYC, América Latina, donde la pandemia, el auge de los precios y la senda de recuperación están teniendo sus propias señas de identidad. “Aunque el horizonte no está totalmente despejado –dice en su artículo Gema Sacristán, del Banco Interamericano de Desarrollo– lo peor de la pandemia ha ido quedando atrás”. A pesar de sus singularidades, en América la recuperación será, al igual que en España y Europa, más lenta de lo previsto y requerirá esfuerzos adicionales.

Las incertidumbres globales perduran, pero entre ellas empiezan a asomar algunas certezas. En este número hemos querido reflejar una de esas certidumbres: la necesidad de adentrarse con valentía e imaginación en una nueva era de cooperación entre los sectores público y privado, en la que alineemos las ambiciones de los sectores claves del tejido productivo y social con las “misiones” económicas que han planteado las instituciones públicas. Se trata de un reto inmenso, al que se suma la trágica presencia de una guerra, que hemos querido abordar con realismo

“En este número de UNO hemos querido reflejar la necesidad de adentrarse con valentía e imaginación en una nueva era de cooperación entre los sectores público y privado”

pero también con dosis de esperanza. Son tiempos en los que debemos ser capaces de atraer y retener el talento, ayudar a los nuevos líderes emergentes, mejorar las capacidades y la empleabilidad de los ciudadanos y abordar enormes oportunidades –como señalan los planes Next Generation EU– en materia de investigación e innovación, para que las transiciones digital y climática sean justas, para modernizar nuestra estructura productiva y fortalecer nuestra seguridad e igualdad. Este número de UNO es una aportación a este complejo proceso y una llamada a todos los lectores para sumarse a este momento apasionante en el que debemos recuperarnos y transformarnos.

RECUPERAR para TRANSFORMAR



Paloma Baena

Directora Senior de la Unidad Next Generation EU en LLYC / España



Joan Navarro

Socio y vicepresidente de Asuntos Públicos en LLYC / España

Recuperar para Transformar nace del profundo convencimiento de que estamos, ciudadanos, empresas y gobiernos, ante un profundo cambio sistémico que requiere nuevas formas de definir y afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad.

Desde la creciente desigualdad económica, política y social que se interpone en el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los objetivos de descarbonización de la economía, que luchamos por mantener en medio de una crisis energética global, o la lucha geopolítica por el liderazgo tecnológico que definirá en gran medida nuestro futuro, **los riesgos, retos y oportunidades que definen esta década están altamente interconectados y son de naturaleza global.**

¿Cómo hacerles frente? La realidad es que no sabemos con certeza cuáles son las mejores respuestas, y para muchos de estos retos carecemos de solución hoy en día. Carecemos también de un mecanismo claro de financiación: las estimaciones de la inversión necesaria para enfrentar los retos globales se sitúan en cifras billonarias, imposibles de movilizar por ningún estado u organización multilateral por sí solo.

En lo que sí estamos de acuerdo los autores de este UNO38 es en que sólo encontraremos

“Solo encontraremos las respuestas si cambiamos las herramientas que utilizamos para encontrarlas, empezando por cómo entendemos el rol del estado, sector privado y sociedad, y sobre todo, la interacción entre ellos”

las respuestas si cambiamos las herramientas que utilizamos para encontrarlas, empezando por cómo entendemos el rol del estado, sector privado y sociedad, y sobre todo, la interacción entre ellos.

Si el estado ya no puede limitarse a no entorpecer, las empresas ya no pueden focalizarse exclusivamente en el beneficio económico. Jordi Sevilla, bajo el paradigma de “misiones”, señala cómo los “desafíos complejos exigen activar esfuerzos coordinados en torno a objetivos claros, capaces de movilizar los recursos necesarios para transformar la sociedad”.

El rol incentivador y regulador del estado y las organizaciones supranacionales para orientar

“Se trata de redefinir roles, procesos y enfoques tradicionales para catalizar soluciones hacia un objetivo común: avanzar hacia una sociedad más resiliente, inclusiva y sostenible como pilar de la recuperación”

la **financiación privada** hacia la sostenibilidad y el impacto, y la respuesta del sector, con un crecimiento de más del 30 % anual, es uno de los ejemplos más claros de avance bajo un propósito común, compatible y mutuamente beneficioso.

Uno de los retos donde esta colaboración se hace más evidente es el de la transición climática. Joaquín Mollinedo nos recuerda el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2019) prevé 240 000 millones de euros solo para la transición energética, y señala que a partir de un marco institucional y direccional claro “el sector privado debe aportar esfuerzo inversor y capacidad de ejecución, pero también conocimiento e innovación, con un horizonte de medio y largo plazo alineado con el interés general”.

“Quien suma gana” argumenta Ximo Puig al señalar que en la Generalitat Valenciana “la empresa lidera y el Consell ha ejercido un rol de catalizador de iniciativas: aglutinando a pymes y empresas tractoras; interconectando sectores; e implicando a todo el ecosistema innovador”.

Raül Blanco lo ejemplifica de la mano de los PERTE, que por diseño incentivan “unir proyectos y consolidar a empresas de muy diferente tamaño, que tienen que trabajar juntas -aportando su experiencia y dimensión- en la

definición y consecución de un gran proyecto global”.

La mirada de América Latina que comparte Gema Sacristán, junto con Matías Kulfas y Daniel Schteingart entre otros autores, nos señala la necesidad de “pasar de medidas defensivas y con objetivos cortoplacistas a una agenda de crecimiento sostenible e inclusivo” que a su vez hace imprescindible, ante el poco margen de maniobra de las políticas monetaria y fiscal, la colaboración entre el sector privado y el sector público.

Algo que sin duda requiere también de reformas estructurales. Rafael Domenech lo ejemplifica en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España, al señalar que “su efecto sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía dependerá del carácter transformador de las inversiones y de su interacción con las reformas estructurales, especialmente en la medida que puedan aumentar la cantidad y calidad de empleo, y mejorar la productividad”.

Fátima Bañez nos recuerda que si hemos salido de crisis recientes ha sido “por la colaboración, el diálogo y la disposición a alcanzar acuerdos que desembocaran en la mejora del bien común”. Una mejora, como señala Adriana Domínguez, que además pasa por “la generación de empleo de calidad y de marcas de aquí, marcas de país”.

Estas y otras muchas reflexiones de autores destacados se encuentran en estas páginas. A las que agregamos, como no podía faltar, la mirada multilateral.

Es más necesario que nunca avanzar hacia estándares comunes y normativas integradas entre países que comparten valores similares. La fragmentación normativa, en materia de medioambiente o de economía digital, solo

nos debilita, generando incertidumbre, disminuyendo la innovación compartida y minando nuestro posicionamiento geopolítico en un mundo en el que de nuevo emergen bloques dramáticamente diferenciados. Del mismo modo, la financiación conjunta de programas de inversión e innovación, como lo son los IPCEI a nivel europeo, será cada vez más común, para poder afrontar las grandes transformaciones en materia energética o de infraestructura digital. Incluso si esto supone, como ha sido el caso del instrumento Next Generation, la emisión de deuda conjunta y mancomunada entre países que no están siempre de acuerdo en lo demás.

“Nada de esto es una utopía, al contrario. Lo empezamos a ver de forma concreta y medible en el marco del instrumento Next Generation EU”

Nada de esto es una utopía, al contrario. Lo empezamos a ver de forma concreta y medible en el marco del instrumento Next Generation EU o en la respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia. Como señala Susana del Río, “recuperación y transformación están acoplado sus vertientes para conseguir una redefinición del proyecto europeo, centrado en un modelo constitucional de suma”.

Sin embargo, este impulso, que apalanca también el incentivo financiero, por sí mismo no será suficiente. Los nuevos modelos de colaboración requieren de cambios profundos para hacerse realidad más allá de los *shocks* externos. Necesitamos una cultura a nivel de administración pública más abierta e innovadora. Que la transformación del rol de las empresas como actores en la sociedad vaya más allá de los datos ESG para formar parte del ADN de su gobierno corporativo y mandato ante sus accionistas. Y que los mecanismos de colaboración público-privados se incentiven y se generen de forma expresa y consistente. En definitiva, se trata de redefinir roles, procesos y enfoques tradicionales para catalizar soluciones hacia un objetivo común: avanzar hacia una sociedad más resiliente, inclusiva y sostenible como pilar de la recuperación.



La **CONVERGENCIA** como **OBJETIVO** del **PLAN** de **RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN** y **RESILIENCIA**



Rafael Doménech

Responsable de Análisis Económico de BBVA Research y Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia / España

La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto algunas de las debilidades estructurales de la economía española. Como muestra el Gráfico 1, durante las últimas cuatro décadas, la brecha de España en términos del PIB por persona en edad de trabajar con respecto a Estados Unidos y los países más avanzados de la UE (E8) se ha mantenido relativamente estable (casi 40 puntos respecto a EE. UU. y algo menos de la mitad respecto a E8), con cambios asociados a la situación cíclica de estas economías.

España pierde rápidamente en las recesiones todo lo que avanza en convergencia en las expansiones. Tras la Gran Recesión y la crisis de deuda soberana, España inició una nueva fase de convergencia con la que redujo en 7 puntos porcentuales su brecha de renta per cápita con respecto a EE. UU. y en casi cinco con respecto a la E8, y se situó en términos relativos incluso mejor que en 2007, en el ciclo expansivo anterior. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 volvió a ser más intensa en España que en las economías avanzadas que nos sirven de referencia.

“La pandemia ha evidenciado algunas de las debilidades estructurales de la economía española. España pierde rápidamente en las recesiones todo lo que avanza en convergencia en las expansiones”

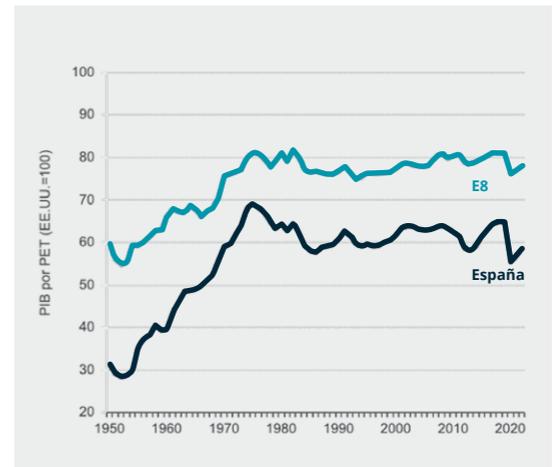


Gráfico 1: PIB por persona en edad de trabajar, 1950-2022.

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE y Comisión Europea. E8 incluye a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia y Reino Unido.

“El éxito del PRTR dependerá tanto del acierto de las inversiones como de la ambición de las reformas que se aprueben y del calendario de ejecución”

En este contexto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado en 2021 representa una oportunidad sin precedentes para potenciar el proceso de convergencia de la economía española, más allá de lo que pueda contribuir a su recuperación cíclica durante los años de ejecución del Plan. El reto es enorme por varias razones. En primer lugar, porque, cuando la recuperación tras la pandemia todavía no se había completado, ha sobrevenido el riesgo de otra crisis asociada a la invasión de Ucrania por Rusia.

En segundo lugar, porque retomar la convergencia con las economías más avanzadas debe hacerse en pleno proceso de disrupción digital y transición energética hacia economías neutras en emisiones de gases de efecto invernadero.

Y tercero, porque la brecha de PIB por persona en edad de trabajar se explica a partes prácticamente iguales por el mayor desempleo y la menor productividad estructurales de España respecto a EE. UU. y la E8.

Las dos últimas razones justifican que el PRTR esté orientado a inversiones que permitan alcanzar los objetivos digitales y medioambientales, y esté acompañado al mismo tiempo por una condicionalidad que obliga a España a adoptar un amplio abanico de reformas estructurales agrupadas en 30 componentes.

El éxito del PRTR dependerá tanto del acierto de las inversiones como de la ambición de las reformas que se aprueben y del calendario de ejecución. Dada la complejidad del Plan, como se ha visto en 2021, la puesta en marcha de las convocatorias, manifestaciones de interés y PERTES, su licitación y ejecución han sido más lentas de lo que se esperaba a finales de 2020 en los Presupuestos Generales del Estado.

Todavía no se dispone de la información suficiente para estimar qué parte de estos fondos europeos pudieron llegar a la economía real ni, mucho menos, para cuantificar con precisión cuántas décimas del crecimiento del PIB del 5,1 % en 2021 pueden explicarse por el Plan. Con todas las cautelas, las estimaciones preliminares apuntan a que su impacto sería inferior a medio punto del crecimiento en 2021. Por lo tanto, el grueso de la ejecución y del impacto del Plan se va a concentrar de 2022 en adelante.

La evaluación *ex ante* de los efectos de las inversiones del PRTR mediante simulaciones en modelos macroeconómicos (véase Boscá et al., 2021) apuntaba a que podrían llegar a contribuir con un aumento del 3 % del PIB de 2025 respecto a un escenario base sin fondos, en el caso de que España ejecute todas las subvenciones potencialmente disponibles y un 50 % de los préstamos. La evaluación *ex post* de los efectos de las inversiones realizadas será más reveladora.

La ejecución dependerá no solo del diseño de los proyectos de inversión. En muchos de ellos, en los que está previsto que haya apalancamiento de inversión privada, también estará condicionada a la demanda por parte de empresas y hogares. Además, como hemos visto a lo largo de 2021, la existencia de cuellos de botella, restricciones en las ca-

denas mundiales de producción y un mayor tensionamiento en el mercado de trabajo (con sectores y ocupaciones en los que aumenta el número de vacantes por cubrir en relación con el desempleo), agravada por las actuales presiones inflacionistas y la crisis de energía y materias primas, puede dar lugar a retrasos de ejecución, a convocatorias que tengan que repetirse para que la demanda satisfaga la oferta de fondos disponibles, o a que una parte de las inversiones se filtre al exterior, con menores efectos en el PIB ante un incremento de las importaciones.

“Todavía no se dispone de la información suficiente para estimar qué parte de estos fondos europeos pudieron llegar a la economía real”

El efecto sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía española dependerá del carácter transformador de las inversiones y de su interacción con las reformas estructurales, especialmente en la medida que puedan aumentar la cantidad y calidad de empleo, y mejorar la productividad.

A modo de ejemplo, un conjunto de reformas que consiguiera elevar de forma permanente la tasa de empleo en 10 puntos durante la presente década (conviene recordar que la tasa de desempleo promedio de España ha sido el 16,9 % de 1980 hasta 2019, antes de la pandemia, frente al 6,7 % en la E8) permitiría incrementar el PIB por persona en edad de trabajar en 12,4 puntos a largo plazo. Sin embargo, al menos por el momento, la reforma del mercado de trabajo de 2021 no ha sido lo suficientemente ambiciosa como para resolver sus problemas estructurales y avanzar hacia una mayor flexiseguridad, como en los países del centro y norte de Europa. Habrá que ver si otras medidas del PRTR, políticas activas del mercado de trabajo o mejora de capital humano son capaces de acelerar y consolidar no solo la convergencia en la tasa de empleo de España a las economías más avanzadas, sino también la de su productividad.

Una COLABORACIÓN IMPRESCINDIBLE



Fátima Báñez

Presidenta de la Fundación CEOE y ex ministra de Empleo y Seguridad Social / España

Hace algo más de dos años, la sociedad española tuvo que afrontar un desafío sin precedentes en su historia reciente. La pandemia de la COVID-19 nos golpeó con dureza, arrebató decenas de miles de vidas y para buena parte de la población supuso una parálisis en sus proyectos personales y profesionales.

Ninguna de las generaciones que conviven en España se habían enfrentado a una situación como esta, y sin embargo supimos afrontarlo mediante un ejercicio de responsabilidad y solidaridad encomiable. Porque lo hicimos unidos y plenamente conscientes de que la palabra "crisis" evoca tanto el riesgo como la oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Para hacerlas mejor.

La experiencia de la década anterior nos había demostrado que era posible. España llegó hasta 2020 habiendo superado una dura prueba que comenzó en 2008, con el desplome del sector financiero en el todo el mundo. Dos años después, en 2010, la incertidumbre disparaba los costes asociados a la deuda pública y, por primera vez, se cuestionaba la sostenibilidad del euro.

En ambos casos, España fue uno de los países más castigados por una tormenta económica que destruyó millones de empleos y cientos de miles de empresas. Desde entonces, emprendimos un camino largo y difícil, de renunciaciones y aciertos, pero en el que también aprendimos una valiosa lección: juntos somos más fuertes. Sumar es avanzar.

“Los fondos europeos para la recuperación se han convertido para la UE y en especial para España en la clave de bóveda para la transformación de nuestra economía”

Sería ingenuo pensar que la salida de aquella crisis fue mérito de los gobiernos, cuando la colaboración, el diálogo y la disposición a alcanzar acuerdos que desembocaran en la mejora del bien común fue el verdadero pilar que nos ayudó a sustentar la recuperación. El mejor ejemplo fueron los acuerdos entre interlocutores sociales que permitieron salvar puestos de trabajo y empresas, y resultaron ser clave para que España recuperara la confianza de sus vecinos europeos.

La llegada de la pandemia nos reafirmó en esta idea de la necesidad del diálogo, la coordinación y, sobre todo, de la capacidad transformadora de la colaboración público-privada.

Así, mientras que la respuesta de la sociedad civil española fue ejemplar desde el primer momento, las empresas, en un ejercicio de responsabilidad, estuvieron a la altura a la hora de alcanzar espacios de consenso con la Administración y verter su vocación solidaria al servicio de las personas. La Fundación CEOE conocía la tarea que tenía por delante y dio un paso al frente para canalizar esa solidaridad empresa-

rial y los distintos niveles de la administración. Por ello, en el mismo mes de marzo de 2020, activamos el programa Empresas Que Ayudan, y más tarde el Plan Sumamos. Salud + Economía, los dos ejes con los que construimos un cauce para que todas las iniciativas impulsadas por las empresas, autónomos, pymes y grandes compañías, pudieran llegar a la sociedad.

Primero, trasladando ayuda material y económica a los colectivos más necesitados durante los peores meses del confinamiento y, después, ayudando en labores de testeo y vacunación. Solo en el marco del Plan Sumamos se movilizó a más de 25 000 empresas y benefició directamente a más de un millón de personas. Algo que no hubiera sido posible sin los convenios de colaboración con el Gobierno central y 14 comunidades autónomas, que suman el 95 % de la población española.

Pero, del mismo modo que decía que la crisis lleva aparejados riegos y oportunidades, esta pandemia supuso la activación de una respuesta europea también sin precedentes. Los fondos europeos para la recuperación se han convertido para la UE y en especial para España en la clave de bóveda para la transformación de nuestra economía. Ya no hablamos solo de salir de un bache económico sino de propiciar la economía del futuro que queremos. Más tecnológica, más sostenible, más inclusiva y productiva, para que los empleos que genere tengan mayor valor añadido y calidad.

De nuevo este reparto de fondos lleva aparejada la colaboración público-privada para su ejecución. Nuestro país dispone, por tanto, de 150 000 millones de euros para configurar su futuro a partir del trabajo conjunto de administraciones y empresas. Merece la pena estrechar esta forma de entendimiento en beneficio de todos.

Entre tanto, no podemos olvidarnos de la trágica invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y

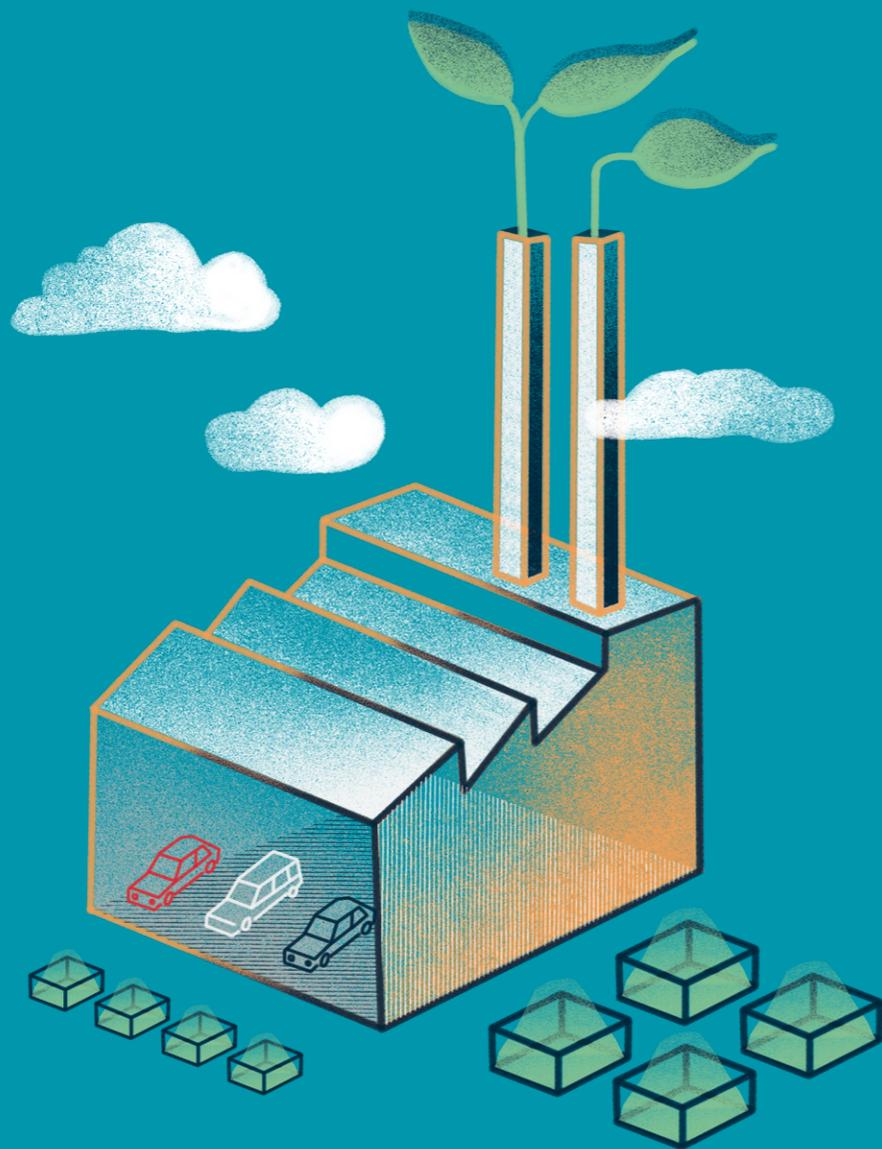
“España dispone de 150 000 millones de euros para configurar su futuro a partir del trabajo conjunto de administraciones y empresas. Merece la pena estrechar esta forma de entendimiento en beneficio de todos”

en este recuerdo, hemos reactivado desde la Fundación CEOE el mismo esquema de colaboración público-privada ante la necesidad de dar respuesta al desafío solidario que supone la emergencia humanitaria provocada por la guerra en Ucrania.

España quiere ayudar a los miles de familias desplazadas que llegan a nuestras fronteras, y las empresas tiene un papel destacado en este esfuerzo.

Pero no se trata de actuar solo ante situaciones de emergencia social y humanitaria. Se trata de hacer más. La sociedad civil quiere liderar su propio proceso de cambio, de transformación. El futuro de nuestro país pasa por atraer y retener a todo el talento, y por mejorar las competencias y la empleabilidad de los desempleados para conseguir empleos de calidad. Son metas que solo pueden alcanzarse si contamos con las empresas, y que revertirán en un impulso de la competitividad de la economía española y en la prosperidad de millones de negocios.

Retomando la idea inicial, como aprendimos en la crisis financiera, nos recordó la pandemia y ahora acaba por confirmar el conflicto bélico en Ucrania, todo aquello que debamos enfrentar o que queramos lograr, tendrá éxito y perdurará en el tiempo si se hace desde el diálogo y escuchando a todos, porque sumando todas las voluntades siempre multiplicamos por los españoles.



FEDERAR la RECUPERACIÓN



Ximo Puig

Presidente de la Generalitat Valenciana / España

“La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia delante”. Subrayé esta frase en un compendio de aforismos y parece escrita por Kierkegaard para el momento actual. El presente nos sumerge en una guerra, una pandemia, un planeta en emergencia climática y un autoritarismo que abreva en el malestar social y que se apoya en esa triple “p” contra las democracias que sintetiza Moisés Naím: populismo, polarización y posverdad. Sin embargo, es mirando hacia atrás cuando comprendemos ciertos aspectos. Y ciñéndonos al asunto que convoca este monográfico –la recuperación– el retrovisor nos muestra una buena noticia: todo ha cambiado desde la Gran Recesión de 2008.

Frente a los recortes, el abandonismo y el sálvese quien pueda de entonces, en esta crisis pandémica ha emergido un keynesianismo inteligente en las instituciones. Europa ha vuelto con su mejor espíritu federal. Con la deuda mutualizada, con el plan Marshall de los fondos europeos, con la compra y reparto de vacunas. También España, con la cogobernanza, ha profundizado en esa vía. El desafío tiene escala global, pero las comunidades autónomas son esenciales en una partida que se juega en dos campos principales: la creación de empleo y el fortalecimiento del bienestar.

Subrayo a continuación cinco coordenadas de esta gran transformación económica, tecnológica y ambiental, y cómo las estamos pilotando en la Comunitat Valenciana.

“Junto a la digitalización y la sostenibilidad, hay un tercer pilar para esta década de oportunidades que abre Europa: la resiliencia”

1. Reindustrializar. Tras décadas de deslocalización miope, Bruselas nos brinda una oportunidad histórica para la reindustrialización a través de Next Generation EU. Desde antes de la pandemia trabajamos para posicionarnos en los sectores críticos que la Comisión Europea quiere potenciar. De esa reflexión surgieron iniciativas, junto al sector privado, como la Alianza Valenciana de Baterías, para fortalecer la cadena de valor del automóvil; la Estrategia Valenciana de Hidrógeno Verde, para rebajar la dependencia energética en nuestras industrias fundamentales, como el azulejo; o el impulso a sectores intensivos en conocimiento –como el aeroespacial–, complemento esencial de nuestra industria tradicional. Los resultados ya son visibles. La decisión de Volkswagen de construir una gigafactoría de baterías en Sagunt apuntala el camino de la reindustrialización. Por un lado, refuerza los cimientos del tejido ya implantado; por otro, nos sitúa en la vanguardia de una revolución tecnológica y convierte a la Comunitat Valenciana en un polo innovador del sur de Europa respecto a la nueva movilidad sostenible.

2. Nuevo Estado del Bienestar. Junto a la digitalización y la sostenibilidad, hay un tercer pilar para esta década de oportunidades que abre Europa: la resiliencia. La pandemia nos obligó a reaccionar a dos velocidades. Con las urgencias iniciales, fletamos aviones con suministros médicos y ampliamos las capacidades hospitalarias. Ahora, la obligación es estructural. Estamos inmersos en el despliegue de un nuevo Estado del Bienestar valenciano con la mayor inversión de nuestro autogobierno para la reforma y construcción de hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios (con los planes Créixer + Convivint, respectivamente) y también en el factor humano: el refuerzo estructural de las plantillas más allá de las necesidades pandémicas. Esa es la "Normalidad Mejorada" que nos debe dejar la COVID-19.

3. Colaboración público-privada. El Diálogo Social es la clave de bóveda de la Vía Valenciana y revierte en una fortaleza: la estabilidad. Es la base que lleva a la creación de empleo y a la generación de riqueza que luego se redistribuye entre la sociedad. Primero, crear; luego, repartir. Por ese orden, como nos recuerda Mariana Mazzucato. Tras haber pactado la hoja de ruta de la recuperación en la Comunitat Valenciana en los acuerdos "Alcem-nos" y haber definido la Estrategia Valenciana para la Recuperación a los seis meses del inicio de la pandemia con 410 proyectos que aspiraban a fondos europeos, la Generalitat y las empresas valencianas ya hemos presentado 592 iniciativas a las manifestaciones de interés de los ministerios, que supondrían casi 13 000 millones de inversión. Y un dato relevante: el 75 % de iniciativas están promovidas por la empresa. La empresa lidera. Y el Consell ha ejercido un rol de catalizador de iniciativas: aglutinando a pymes y empresas tractoras; interconectando sectores; e implicando a todo el ecosistema innovador. Quien suma, gana en esta década decisiva.

4. Más cogobernanza. La pandemia ha sido una máquina de crear federalistas. Pero siempre hay margen de mejora. Por ello, sugiero tres propuestas para una mayor gobernanza compartida en el Plan de Recuperación.

Primera: incluir PERTE autonómicos para apoyar a sectores estratégicos, aunque estén hiperconcentrados en un territorio, como es el azulejo de Castelló.

Segunda: dar más peso a las autonomías en la planificación, programación y gestión del segundo bloque del Mecanismo de Recuperación, que empieza en 2024. Por ejemplo, pasando del 50 % al 75 % del fondo a gestionar por las comunidades.

Y la tercera: potenciar la participación autonómica en el diseño de los PERTE vinculados a su territorio, para aprovechar conocimiento y proximidad.

5. Es la eficiencia, estúpido. Esta última coordenada es esencial. Urge sustituir la imagen de una Administración obstruccionista por la de una Administración cooperadora. Del embudo de la burocracia que multiplica trámites a la palanca pública que multiplica oportunidades. De nuevo, Mazzucato. Apunto tres iniciativas legales puestas en marcha por la Generalitat. Por un lado: la simplificación administrativa para agilizar la gestión de los fondos europeos. Por otro: a raíz de la emergencia energética, la agilización del despliegue de energías renovables con un decreto ley expreso para acelerar la transición energética. Y en último término, un Plan Reactiva de lucha contra la inflación, con ayudas a empresas y familias, y con medidas de eficiencia energética. En esta década se nos juzgará por la profesionalidad en la gestión. Frente a los populismos que simplifican problemas complejos, los gobiernos hemos de resolver con eficiencia esos retos. Es, sencillamente, la gestión. Entendiendo desde el pasado y viviendo hacia delante.

El PODER y el IMPACTO de la POLÍTICA EUROPEA



Susana del Río Villar

Miembro del Comité de expertos independientes de la UE / España

La Unión Europea está mostrando su poder político de manera tangible en la recuperación y en la transformación económica y social. La pandemia y la guerra en Ucrania están funcionando como catalizadores y aceleradores de respuestas.

Las instituciones, como referencia continua y firme para tejer política, están mostrando su capacidad para vertebrar decisiones que están forjando la UE del siglo XXI. Hay que resaltar también el poder interinstitucional, los entresijos que permiten a las instituciones trabajar de manera sincronizada sumando y creando sinergia.

Ante la crítica, convertida en tópico, de lo lenta que es la UE en tomar decisiones, es ahora cuando podemos afirmar con orgullo de ser europeos que la UE está reaccionando, decidiendo y respondiendo con agilidad, contundencia y proyección.

Cuando llega la COVID-19, los representantes de las instituciones europeas son conscientes de que deben buscar vías para poder dar luz verde a un Plan de Recuperación europeo. Al mismo tiempo, y sin contar con la competencia en materia de sanidad, la Unión Europea fue capaz de coordinar una campaña de vacunación europea, un plan con dimensión sanitaria supranacional.

Trazar el Plan de recuperación europeo ha significado para la UE entrar en un nuevo proceso de acción política ensamblada a la económica

“La Unión Europea está mostrando su poder político de manera tangible en la recuperación y en la transformación económica y social”

que configura en sí misma un hito europeo. Creo que podemos afirmar que lo que está sucediendo constituye un fortalecimiento del proceso de integración europea dentro de su propia integración. Al mismo tiempo, en esta gobernanza multinivel europea observamos cómo se sincronizan las fuerzas de unión con las miradas de cada Estado miembro hacia sí mismo. Es aquí donde la soberanía europea sobrevuela los círculos concéntricos de pertenencia y pertenencias; de ciudadanía múltiple y múltiples ciudadanías. En esta línea, hay que observar que una política UE con rango multinivel debe estar acompañada de políticos capaces de mirar tanto al nivel nacional como al europeo en un modelo de gobernanza en el que se conjugan espacios, tiempo y colores políticos.

Los fondos de recuperación se han llamado Next Generation EU. Si bien es cierto que en un primer momento pudo parecer un nombre con un toque de *marketing* quizá demasiado explícito, el tiempo ha ido asentando el acierto de unos conceptos que contienen la solidaridad intergeneracional y la responsabilidad compartida como ejes.

Los fondos indican dos vectores, el Pacto Verde Europeo y la Digitalización, junto a los ejes de igualdad y crecimiento y cohesión social.

La sostenibilidad, enraizada a las políticas medioambientales, se extiende a la necesidad de una sostenibilidad sostenible en todos los parámetros: institucional, político, empresarial, financiero, académico y comunicativo. Solo si lo sostenible se vertebraba de manera transversal podrá la sociedad avanzar ante los grandes retos y desafíos de nuestro tiempo.

Recuperación y transformación económica van de la mano en cómo identificar en el tejido empresarial las fortalezas de cada empresa y establecer un plan de negocio que aúne lo que funciona con la incorporación de instrumentos que permitan implementar los vectores enfocados a la transición ecológica, la digital o a ambas.

En el despliegue de la primera deuda conjunta europea es fundamental observar el proceso de decisión institucional con atención al trabajo interinstitucional al que me he referido al comienzo. La política de la UE se modela a través de la búsqueda del consenso y entiende mejor la fuerza del debate para encontrar soluciones basadas en la transversalidad.

La guerra en Ucrania está impulsando a la UE a tomar decisiones que quizá no se habrían tenido que poner sobre la mesa en años. Las respuestas de la Unión Europea y su posicionamiento en la política multilateral están dando visibilidad a que la UE necesita una política exterior real. En el tablero de ajedrez de la globalización, la UE está iniciando la andadura hacia su autonomía estratégica precedida por una brújula que le indique

“Las respuestas de la Unión Europea a la guerra en Ucrania y su posicionamiento en la política multilateral están dando visibilidad a que la UE necesita una política exterior real”

dónde está su ruta. La guerra en Ucrania está produciendo una aceleración de puesta en marcha para el logro estratégico y la UE está entrenando y jugando ya, compitiendo y luchando, en directo. El despertar de la Europa geopolítica es un hecho.

La amenaza real de Vladimir Putin a nuestro modelo de integración, a la democracia y a la economía produce una revisión y un ajuste tanto de los parámetros de la economía europea como de un seguimiento aún más exhaustivo en la evaluación de los fondos de recuperación europeos.

Un hito que hay que alzar es la aprobación del mecanismo de vinculación de la recepción de los Next Generation EU al cumplimiento del Estado de derecho. Esta acción de gran política ensambla la recepción de los fondos al respeto a los valores enunciados en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa. Este logro conlleva la profundización política de la UE y, por tanto, hace más sólida su propia razón de ser.

Recuperación y transformación están acoplando sus vertientes para conseguir una redefinición del proyecto europeo. Ante la desintegración que podría suponer la mirada de cada Estado hacia sí mismo y sus intereses, el contexto internacional hace más

visible que nunca la aceptación de que la UE funciona y que su evolución debe asentarse por ejemplo en un debate elevado sobre el nacimiento de la unión fiscal europea. Todo se centra en una soberanía europea combinada con las soberanías nacionales. En esta complementariedad, destaca la referencia al modelo constitucional de la UE enraizado a la Constitución de cada uno de sus Estados. Un modelo constitucional de suma.

El recorrido de ida y vuelta entre la decisión de la UE y la respuesta de cada Estado miembro está impulsando una nueva política basada en una respuesta coordinada conjunta. Los ciudadanos, a través de la democracia representativa, deben verse representados en todas estas decisiones. El poder integrador de los ciudadanos es vital en el proceso de integración de nuestro proyecto europeo.

“El poder integrador de los ciudadanos es vital en el proceso de integración de nuestro proyecto europeo”

En la Conferencia sobre el futuro de Europa se han hecho presentes temas pendientes de futuro. El poder de la política europea está desplegándose en crear tendencia que permita a corto, medio y largo plazo la génesis, desarrollo e implementación de la política y de las políticas concretas que definan e impacten en todas las esferas. Siguiendo la estela de Robert Schuman, la UE sigue con el paso a paso y, en esta etapa convulsa, está dando pasos de gigante. El modelo político europeo está dando un nuevo paso a través de políticas concretas, que tocan los ciudadanos, basadas en la solidaridad de hecho.

La COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA para la TRANSICIÓN ECOLÓGICA



Joaquín Mollinedo Chocano

Director General de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona / España

Durante los últimos años, la sociedad española se ha mostrado cada vez más consciente de la importancia de la preservación del capital natural y climático y de la necesidad de un sistema económico que asegure su mantenimiento y regeneración de manera adecuada. En el ámbito energético, ello requiere de un modelo de electrificación de la energía y descarbonización de la electricidad que asegure, además –particularmente, en España– la seguridad del suministro, cuya importancia ha quedado trágicamente patente en los terribles acontecimientos bélicos de las últimas semanas.

La experiencia ha demostrado que el reto de la transición ecológica no puede abordarse únicamente, ni por capacidad ni por volumen de recursos, desde el sector público. Las instituciones pueden guiar el proceso y el sector privado debe desempeñar su función en la ejecución de las inversiones necesarias, en respuesta a las señales regulatorias y económicas que desde el ámbito público se emitan.

En este necesario reparto de papeles, al sector público le corresponde:

- Establecer las grandes prioridades coherentes con los objetivos ambientales y climáticos nacionales, que a su vez deben corresponder razonablemente a los fijados en los ámbitos europeo e internacional.

“El sector privado debería aportar el grueso del esfuerzo inversor para la transición ecológica, con cerca de 190 000 millones de euros”

- Incidir sobre las expectativas empresariales, asegurando en particular la irreversibilidad del proceso frente a los enormes riesgos y costes de la inacción.
- Atenerse a los principios de buena regulación recogidos en la normativa española y europea, respetando los criterios de necesidad y proporcionalidad.
- Garantizar la necesaria estabilidad regulatoria y seguridad jurídica para los sectores inversores que deben promover la transición, con el fin de evitar señales confusas o contradictorias que podrían distorsionar el proceso y favorecer el mantenimiento del statu quo.
- Procurar la garantía de una rentabilidad razonable que estimule y favorezca la inversión en infraestructuras y tecnologías sostenibles. Deben ser infraestructuras y tecnologías habilitantes que posibiliten los cambios de comportamiento asociados a las señales de precios (de poco sirve incentivar



el consumo de energías limpias si no se promueve la inversión en generación renovable; de poco sirve la promoción del vehículo eléctrico si no existen la infraestructura o los servicios de recarga suficientes).

- Asegurar de que la tributación y otros instrumentos de política fiscal y presupuestaria garantizan la internalización en los precios de las externalidades climáticas y ambientales.
- Determinar un ritmo de transición asumible económica y socialmente, pero siempre coherente con la urgencia del reto. La necesidad de periodos transitorios no puede servir de excusa para el retraso.
- Gestionar la dimensión social del proceso, asegurando una compensación razonable a los colectivos más vulnerables que puedan verse afectados, con un enfoque de transición justa.

En los Estados compuestos, como España, es fundamental también la debida coordinación entre las Administraciones Públicas. La actuación de cada de ellas debe tener en cuenta el marco legal de las instituciones relevantes y su actuación debe llevarse a efecto y manera armonizada y coordinada, buscando que el conjunto de ésta sea coherente con el interés público en todas sus dimensiones

A partir de este marco institucional, el sector privado debe desplegar su actividad aportando esfuerzo inversor y capacidad de ejecución, pero también conocimiento e innovación, con un horizonte de medio y largo plazo, con el objetivo último de que estos fines de interés general se logra de la manera más eficiente posible en un contexto competitivo y favorecedor de la inversión.

“La transición ecológica requiere inversión en nuevas instalaciones e infraestructuras y, por tanto, procesos de revisión ambiental”

Las cifras de inversión necesaria son elevadas: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2019) prevé 240 000 millones de euros solo para la transición energética. En línea con lo anteriormente señalado, se estima que el sector público deberá invertir unos 50 000 millones de euros (infraestructura y subvenciones principalmente), mientras que el sector privado debería aportar el grueso del esfuerzo inversor, con cerca de 190 000 millones de euros. La correcta imbricación de lo público y lo privado determinará que esas previsiones puedan llevarse a término, en particular a partir de un diseño adecuado de subvenciones e infraestructura que asegure la máxima inducción de inversión privada.

La colaboración público-privada admite diversos cauces y herramientas jurídicas. Es importante que los instrumentos legales necesarios existan y sean accesibles. Otros países llevan tiempo aplicando fórmulas que permiten, con las salvaguardas necesarias, una colaboración estrecha y constructiva entre el sector público y el privado: piénsese en los procedimientos de licitación de “libros abiertos” o en la posibilidad de plantear desde el sector privado propuestas para futuros proyectos (“iniciativas privadas”) en áreas donde exista interés público y rentabilidad suficiente para el inversor. Mientras tanto, en España la mera licitación de concesiones ordinarias ha devenido desde

hace tiempo prácticamente inviable, al condicionarse u obstaculizarse con requerimientos normativos de discutible utilidad pública.

Por último, la transición ecológica requiere inversión en nuevas instalaciones e infraestructuras y, por tanto, procesos de revisión ambiental. Es esencial que estos se apliquen de manera rigurosa y seria: España es un país con una gran riqueza natural que es imprescindible preservar. También es necesario que dichos procesos internalicen el impacto ambiental de la inversión para prevenir el cambio climático, cuyo efecto protector del ambiente a medio y largo plazo es indudable.

“La colaboración público-privada debe buscar “lo mejor de los dos mundos”. La simbiosis de lo público y lo privado operando de manera independiente pero colaborativa”

Y para ello se requiere que estos procesos de revisión ambiental lleven asociados una dotación de recursos humanos y materiales proporcionada a la importancia y urgencia del reto climático-ambiental y que se aseguren tiempos razonables de tramitación. No debemos asociar el necesario rigor de estos procesos con la dilación en el tiempo preciso para su resolución; es posible realizar revisiones ambientales exigentes o más en plazos razonables si se cuentan con los recursos necesarios para ellos.

En suma, la colaboración público-privada debe

buscar “lo mejor de los dos mundos”. La simbiosis de lo público y lo privado operando de manera independiente pero colaborativa. Aportando cada uno de los agentes sus potencialidades de manera que se consigan las mayores sinergias posibles entre ambos. Estos han sido los cimientos sobre los que se ha construido la posición europea en materia climática, y su continuidad y refuerzo serán también clave para que la siguiente fase de la transición ecológica (aún más delicada que la anterior) se desarrolle con eficacia y fluidez.

La moda **ESPAÑOLA**, los **'NEXT GENERATION'** y la **GUERRA**



Adriana Domínguez

Presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez / España

España es una potencia internacional en moda, tanto por sus marcas como por la singularidad y la fuerza de sus empresas. Pero, en la actualidad, nos encontramos en un entorno de incertidumbre, debido a los efectos macroeconómicos acelerados por la guerra de Ucrania. Inflación, mercados cerrados, incremento de los costes de la energía eléctrica, del petróleo y de la logística añaden problemas y anormalidad económica. La situación va a generar gran impacto en las cuentas de resultados, que ya vienen de dos años de pandemia y una cierta hibernación económica.

El sector textil tiene un gran reto por delante. Por primera vez en su historia las 20 000 empresas que lo conformamos, de las que un 86 % son pymes y un 12 % son micro-pymes, se han unido bajo un único organismo, el Observatorio Textil y de la Moda, para hacer frente común y abordar su transformación.

En Adolfo Domínguez nos hemos acostumbrado a navegar en aguas turbulentas y, sobre todo, a salir reforzados de ello. Hemos tenido que cambiar nuestro enfoque para pasar de un esquema mental de resiliencia, a un esquema nuevo y más adaptado a los tiempos, de antifragilidad. Las dificultades nos vienen bien para acelerar el cambio, adaptarnos y ser relevantes en la economía actual. Nos estamos transformando en una empresa del futuro, moderna y humana a la vez. En definitiva, sostenible.

“Las dificultades nos vienen bien para acelerar el cambio, adaptarnos y ser relevantes en la economía actual”

Hemos puesto nuestro plan de impacto positivo en el corazón de nuestras decisiones. Tanto con la selección y certificación de materias primas, que es el *core* de nuestro negocio, como con muchas otras iniciativas que lo acompañan. Un ejemplo de ello reside en la renovación de las tiendas, diseñadas con criterios de artesanía y kilómetro cero. También, hemos desarrollado un proyecto denominado *Vístete de árbol*, que se centra en el diseño de prendas creadas con la marca TENCEL™ *Lyocell*, una fibra procedente de bosques sostenibles que empleamos en nuestras prendas.

La Unión Europea (UE) debate si establecer nuevos fondos que amortigüen los efectos de la guerra de Ucrania, la inflación y el desabastecimiento. Desde el Gobierno español se estudia si nuestra industria textil es o no merecedora de un impulso de modernización. Podría ser una oportunidad para atraer la instalación de nuevas tecnologías y plantas de reciclaje de ropa; para retener y aumentar el empleo. Un impulso hacia la sostenibilidad en la que nosotros ya confiamos.

Además, el *nearshoring* (traer la producción a cercanía) impulsaría la creación de nuevas plantas y la relocalización de procesos productivos que en su día se globalizaron. Existen grandes oportunidades si los fondos Next Generation se fijan en ello y la UE es capaz de afrontar la crisis bélica con nuevas aportaciones específicas. Una crisis encadenada, pero diferente a la del coronavirus.

España debe apostar por nuestro sector porque asegura y genera empleo en el país, demostrando su viabilidad y robustez, y porque genera marcas de aquí, marcas de país. Pero tiene serios retos por delante. Esperamos que el apoyo a nuestras empresas sirva para que se adapten a un entorno complejo, pero lleno de oportunidades.

“Nos estamos transformando en una empresa del futuro, moderna y humana a la vez. En definitiva, sostenible”

Nosotros, que cumplimos 40 años de La arruga es bella y 25 años como empresa decana del sector en Bolsa, sabemos de la importancia de adaptarse a los tiempos. Nos ajustamos a los nuevos hábitos de nuestros clientes, por ejemplo, el aumento de la informalidad en el vestir y la vestimenta *gender fluid*, la forma en que llegamos al mercado (nuevas omnicanalidades como venta por WhatsApp y *social life shopping*), con nuevos rituales en las tiendas *brick and mortar* tradicionales, con más patrones diversos por morfología y positividad de todos los cuerpos, con prendas certificadas que aseguran la trazabilidad y los sellos sostenibles.



Los ESTADOS de DERECHO DEMOCRÁTICOS, SOCIALES y SEGUROS



Nuno Magalhães

Director de Contexto Político de LLYC Portugal / Portugal

A principios de este siglo, hace apenas 22 años, inspirado por Fukuyama, el europeo se proclamó el “último hombre” de la evolución sociocultural y heredero de la “definitiva” forma de gobierno, la democracia liberal. Y avanzaba eufórico hacia una Europa cada vez más unida, capaz de alcanzar la “paz duradera” que se había propuesto, integrando a doce nuevos Estados del Este, enemigos hacía poco más de una década, ofreciéndoles un modelo económico y de Estado basado en una moneda única e incluso, se argumentaba entonces, reunidos en una única federación.

De las tres cosas, solo esta última no se llevó a cabo, en gran medida por la tozudez de franceses e irlandeses, que lo rechazaron en referendos internos, y por la oposición de un Reino Unido siempre a caballo entre Europa y América. Pero la victoria de este modelo político, económico y social parecía tan abrumadora como inevitable. A la lucha por el Estado de Derecho en los siglos XVIII y XIX y la consagración de derechos, libertades y garantías, le siguió otra en el siglo posterior que, más allá de reconocer la existencia de los derechos de los ciudadanos ante el Estado, fue capaz de proclamar un conjunto de principios universales a los que se añadieron nuevos derechos como la salud, la educación, la cultura y el bienestar. De esta manera, se crearon los Estados de Derecho Democráticos y Sociales de las democracias liberales occidentales, como modelo de “última generación”, proporcionando a los ciudadanos una calidad de vida como nunca se

“Lo cierto es que los Planes de Recuperación y Resiliencia parecen hoy, e incluso antes de que la mayoría de los Estados de la Unión Europea comiencen a aplicarlos y menos aún a beneficiarse de ellos, un mero punto de partida”

había visto en el mundo. Aburridos de tanto por conquistar, los “europeos” decidieron afirmar sus valores “aquí y ultramar”, convencidos de que el mundo “solo evoluciona y avanza” en la dirección correcta.

Se equivocaron. Y lo hicieron dentro de la propia “casa”. Algunos Estados miembros dieron marcha atrás en este proceso. Y fue la Unión la primera en reconocerlo con condescendencia, al igual que algunos de sus peligrosos “vecinos”. Menos de un cuarto de siglo después, los “tiempos y los vientos” parecen haber cambiado. Tras una pandemia inesperada, que sin embargo “migró” desde el Este a Europa, o la Unión Europea para ser exactos, esta reaccionó conforme a los Tratados y, a diferencia de lo que ocurría a principios de siglo y en lo que respecta a los llamados PIGS¹, pudo centralizar la distribución de vacunas y reaccionar económicamente. Esto lo hizo mediante la concesión

¹ Portugal, Italy, Greece and Spain.

de un conjunto de fondos europeos como nunca antes se había visto, cuyo tamaño parecía corresponderse con un “bazuca”, un nombre tal vez no tan acertado hoy en día.

Europa ofrecía apoyo, los préstamos eran asequibles, los tipos de interés y los precios eran bajos, y todo parecía “ir bien”, como se anunciaba. Y entonces, porque la historia parece repetirse obstinadamente, una de las “democracias iliberales”², aisladas pero vecinas parece haber cambiado todos los planes de éxito. El Imperio ruso “contraatacó” y trajo consigo la incertidumbre al anunciado siglo de paz y prosperidad. Es cierto que vivimos en una sociedad digital en la que todo cambia y se transforma con rapidez, pero nadie, en beneficio de los cargos públicos, podía imaginar la realidad a la que nos enfrentamos y Europa parece haber retrocedido setenta años. El crecimiento económico, que había sido más o menos una constante, parece haberse desgastado definitivamente y los precios están subiendo como no se veía desde hace mucho tiempo. Esta circunstancia, como casi todo en nuestro tiempo, simplificada en una palabra –estanflación– “decretó” el “fin del dinero barato” que sostenía nuestro crecimiento de las últimas décadas y parecía ser suficiente para aguantar la pandemia³. Lo cierto es que los Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR), aprobados a mediados de 2021, parecen hoy, e incluso antes de que la mayoría de los Estados de la Unión Europea comiencen a aplicarlos, y menos aún a beneficiarse de ellos, un mero punto de partida, por no decir documentos históricos.

Llegados a este punto, “navegar a la vista” y “vivir de rentas” de un Estado del Bienestar que fue creado por el esfuerzo y el talento de generaciones de europeos seguramente no será suficiente, y hará falta mucho más que gestionar los impactos del día a día, porque más que luchar contra el aumento de los precios de los cereales, de la energía o de los combustibles, hará falta visión y alma para afrontar los

“Europa prestaba apoyo, y todo parecía “ir bien” como se anunciaba. Y entonces, porque la historia parece repetirse obstinadamente, una de las “democracias iliberales” aisladas pero vecinas parece haber cambiado todos los planes de éxito”

retos que se plantean. Resistir la exposición europea de la economía rusa⁴; integrar a millones de personas, muchas de ellas cualificadas, que tuvieron que huir de la guerra; reforzar los presupuestos de defensa; hacer frente al crecimiento de los costes de contexto; inyectar inversión reproductiva en la economía y mantener los estados de bienestar, no será fácil. No en vano, los impuestos tienen un fin, muchos Estados ya están más allá de ese fin, y las exigencias de los ciudadanos han crecido en un ámbito costoso: la seguridad, que ya no requiere solo material bélico, sino también seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad económica e incluso ciberseguridad y seguridad espacial⁵. Por eso, el debate de los últimos días, sobre todo en Portugal, ya no parece ser tanto sobre el PRR que tenemos, sino sobre el PRR que debemos tener. El siglo XXI, para nuestra sorpresa, no será el siglo de los Estados Democráticos Sociales de Derecho, sino el de la construcción de Estados de Derecho Democráticos, Sociales y Seguros...

² Término tan reciente como incoherente.

³ La Reserva Federal norteamericana ha anunciado esta semana la subida de los tipos de interés de referencia en Estados Unidos repartidos en siete veces, lo que sin duda repercutirá en las economías europeas.

⁴ 50 000 millones de euros solo entre Francia e Italia. 15 000 millones para Portugal.

⁵ No por casualidad. Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo, habló en Versalles de la seguridad espacial como un reto europeo. Porque es tan necesaria como costosa.

UNO + 1 Entrevista

a Antón Costas por
José Antonio Llorente



Antón Costas

Presidente del Consejo Económico y Social de España / España

Antón Costas (Vigo, 1949) es uno de los economistas españoles más relevantes. Es autor de una amplia obra dedicada a la política económica, las reformas institucionales, los procesos de liberalización y la coyuntura económica y política de España y Europa, y es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona. Pero también ha tenido un destacado papel al frente de instituciones de la sociedad civil –fue presidente del Cercle d’Economia– y de organismos oficiales: hoy es presidente del Consejo Social y Económico del Gobierno de España.

En esta conversación repasamos algunas de las cuestiones que ha abordado en su último libro, “Laberintos de la prosperidad”: la relación potencialmente creativa y beneficiosa entre el mercado y el Estado, la necesidad de tener buenas empresas que creen buenos empleos, la transformación digital y ecológica bajo el amparo de los fondos europeos y, por encima de todo, los retos de forjar una economía inclusiva que él describe como “un nuevo contrato social centrado en los buenos empleos”.

P. En los últimos años, algunos grupos sociales no solo han perdido la prosperidad, sino que han perdido las expectativas de volver a encontrarla. En su último libro, “Laberintos de la prosperidad”, usted ha hablado de renovar el contrato social para volver a encontrar esa prosperidad inclusiva. ¿Qué clase de contrato social necesitamos para reactivar la economía de una manera justa?

R. Necesitamos un contrato social que combine de forma equilibrada una economía vibrante e innovadora y una sociedad justa. Para ello este contrato social debe centrarse en crear buenos empleos, para más personas y en más lugares del país. De lo contrario, la falta de expectativas y oportunidades que sufren muchas personas, especialmente en pequeñas y medianas ciudades y en el mundo rural, nos llevará a una sociedad muy conflictiva y a una política polarizada y autoritaria.

La idea de contrato social surge de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace que una sociedad liberal, pluralista, con un sistema de economía de mercado funcione armoniosamente, que el crecimiento se concilie con el progreso social y que la democracia evite caer en la barbarie? Eso no se logra de forma automática con la economía de mercado.

Se necesita un “pegamento” social, un compromiso moral y político de aquellos a los que les va bien con el sistema con aquellos que se arriesgan a quedarse atrás o, en muchos casos, en las cunetas de la falta de empleo y de ingresos para llevar una vida digna y educar a sus hijos.

En el pasado ese pegamento fue el contrato social de la postguerra mundial, centrado en la redistribución y en la construcción de los tres pilares del actual Estado del Bienestar. Hoy, en la medida en que la desigualdad y la pobreza vienen principalmente de la falta de empleo o de los malos empleos, necesitamos un contrato social centrado en la etapa de la producción, en la que se crean los empleos y se fijan los salarios. También en la etapa de la pre producción, con una buena educación y formación profesional dual en la que las empresas tienen una responsabilidad fundamental e ineludible.

P. Quizá otra de las cosas que debemos renovar es la visión en forma de dicotomía del estado y el mercado. Debemos imaginar nuevas formas de cooperación entre el Estado y el mercado, entre el sector público y el privado. ¿Cómo ve usted esa relación?

R. Esa dicotomía es maniquea y profundamente perturbadora. En una sociedad liberal, mercado y Estado no son mecanismos rivales, sino complementarios. El desarrollo económico moderno no se puede explicar sin el juego combinado de ambos. Pero tampoco solo con ambos. La prosperidad tiene un tercer pilar: la comunidad. Recientemente, Raghuran Rajan, prestigioso economista de la Universidad de Chicago y ex presidente del Banco de la India, ha publicado un libro en el que intenta explicar las causas del profundo malestar y polarización existentes en Estados Unidos. El propio

título es ilustrativo de la tesis que sostiene: “The Third Pillar. How Markets and the State Leave the Community Behind”. También en España hemos olvidado en los últimos treinta años a aquellos que a lo largo del territorio se quedaron dañados y relegados por las consecuencias de la desindustrialización. Tenemos que volver a dar oportunidades y expectativas de progreso a las comunidades que viven en pequeñas y medianas ciudades y en el mundo rural. Para ello necesitamos políticas industriales, de innovación y desarrollo centradas en las comunidades. No es tarea fácil, pero es esencial si queremos volver a reconciliar crecimiento con progreso social.

P. También hay otro par de ideas que durante mucho tiempo hemos visto como una dicotomía y seguramente no lo es: por un lado, la eficiencia económica. Por el otro lado, la justicia social. Ahora sabemos que ambas cosas pueden y deben ir de la mano.

R. La idea de que una sociedad más equitativa solo se puede conseguir al coste de reducir la eficiencia de la economía es otra dicotomía de uso frecuente en el debate público y político, que ahora sabemos que es falsa. Cuando estudié la Licenciatura en la facultad me hicieron leer y aprender la llamada ley de Okun: un economista norteamericano muy preocupado por la desigualdad que, sin embargo, se encontró con la sorpresa de que los datos que pudo manejar en los años setenta del siglo pasado decían que había una relación inversa entre sociedad justa y eficiencia económica. Es la famosa imagen del pastel, si repartirlo mejor a riesgo de no crecer, o crecer para más tarde ver cómo se reparte mejor. Ahora, desde hace un poco más de un lustro, utilizando mejores datos y técnicas estadísticas de las que pudo utilizar Okun, sabemos que no es así: una sociedad más justa da lugar a una economía más

eficiente, innovadora y productiva. Creo que es una verdadera “epifanía”, una revelación muy importante y aún poco conocida.

P. Y una parte del problema a solucionar es el del empleo. La generación de buenos empleos por parte de buenas empresas. ¿Cómo conseguimos recuperar los buenos empleos cuya ausencia es una de las causas de la sensación de malestar que tienen partes relevantes de la sociedad?

R. Comprometiéndonos con la creación de buenos empleos, para más personas y en más lugares del país. La pregunta es: ¿Quién crea empleo? En primer lugar, las buenas empresas. Tenemos que promover y fomentar la existencia de buenas empresas. Para ello tenemos que fortalecer la capacidad innovadora y la productividad del amplio tejido empresarial en muchos casos liliputiense y del sector terciario. En segundo, la cantidad de empleo depende también de una buena gestión de la demanda agregada de la economía, especialmente en las etapas de recesión. En la recesión de 2008 gestionamos mal, con la llamada “austeridad”, y el empleo y la actividad económica se hundieron en el pozo negro de la depresión durante cinco años, algo inaudito. En la recesión pandémica de 2020 gestionamos bien, el empleo no se desplomó y la actividad económica se recuperó rápidamente. Tenemos que sacar buenas lecciones de estas dos experiencias. Cada vez que en los últimos treinta años hemos gestionado mal las crisis, y permitimos que las recesiones durasen muchos años, hemos añadido una capa más de desempleo de larga duración. Espero que ahora hayamos aprendido para no volver a hacerlo.

P. Ahora, tras la pandemia, entramos en una fase que esperamos que sea de recuperación económica, aunque la guerra de Ucrania lo dificulte en gran medida. Pero además coincide con dos enormes transformaciones: por un lado, la ecológica y, por el otro, la digital. ¿Qué retos y qué posibilidades ve en ese doble proceso?

R. Al coincidir con una nueva era de guerra y conflicto geopolítico prolongado y de inestabilidad en las cadenas globales de suministros y de fuerte alteración de los precios de materias primas básicas, tendremos que encontrar equilibrios adecuados entre los procesos de digitalización y descarbonización y asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo.

Son momentos para recordar aquella máxima de San Agustín en sus “Confesiones” cuando le pedía al Señor que “le concediese la castidad, pero no ahora mismo”. Con la descarbonización nos va a suceder algo parecido. La idea de una digitalización y una descarbonización “justa” es potente, aunque no fácil de lograr. Vuelvo a insistir en la necesidad de políticas centradas en los lugares que atiendan especialmente a los impactos territoriales de la descarbonización y que no nos ocurra lo que sucedió con la desindustrialización de finales del siglo pasado.

Respecto a la digitalización, las nuevas tecnologías se pueden utilizar para sustituir empleos humanos o para mejorar la capacidad de innovación y productividad de las personas. No hay fatalismo en esto. Depende de la orientación que le demos a la dirección del cambio tecnológico. A mi juicio, lo fundamental es lograr rápidamente la alfabetización digital básica del conjunto de la población.



P. ¿Qué opinión le merece el despliegue de herramientas europeas novedosas, como los fondos europeos? ¿Cree que suponen la muestra de que hemos aprendido de lecciones pasadas y de que podemos hacer las cosas de manera más imaginativa?

R. La decisión de crear los fondos europeos “Next Generation” es un “momento hamiltoniano” de la UE. Con esta expresión hago referencia a Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de EE. UU. en el Gobierno de G. Washington, que logró la comunitarización de la deuda de los Estados después de la Guerra de la Independencia, la emisión de la primera deuda federal y la puesta en marcha de políticas industriales, de innovación y desarrollo que forjaron esa gran nación que es hoy Estados Unidos.

Pienso que los fondos Next Generation EU, la emisión de deuda europea y las nuevas políticas industriales y de innovación estratégicas son ese “momento hamiltoniano” de la UE. Una vieja máxima clásica dice que nunca hay vientos favorables para el que no tiene rumbo. Los fondos “Next Generation” son un viento favorable extraordinario para la transformación de la economía privada y el sector público español. Ahora hace falta que fijemos bien el rumbo de esa transformación.

P. Al final, la pregunta siempre es: ¿cómo podemos utilizar la economía, las ideas económicas, las herramientas que nos da, para el bien común?

R. Mis maestros en la Facultad, en particular los profesores Fabián Estapé y Ernest Lluch, me enseñaron que, bien utilizada, la economía es una palanca extraordinaria para el bien común. Así lo creo. Los gobiernos pueden hacer mucho y bien para el bienestar de las personas. Y la combinación de una economía dinámica y vibrante con una sociedad justa es la mejor combinación para volver a civilizar el capitalismo, reconciliándolo con el progreso social y la democracia. Es una gran tarea pendiente. Y creo que lo podemos hacer. Como lo hicieron nuestros padres y abuelos después de la Gran Depresión de los treinta y la Segunda Guerra Mundial: con un nuevo contrato social centrado ahora en los buenos empleos.

El **PLAN** de **RECUPERACIÓN**, una **VISIÓN** de **FUTURO** para la **POLÍTICA INDUSTRIAL**



Raúl Blanco

Secretario General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo / España

La crisis social, económica y sanitaria que hemos vivido, y en la que, aunque con claras perspectivas de salida, aún estamos inmersos, ha golpeado a la industria española y a la mayoría de los sectores económicos de nuestro país. Esta crisis vino a superponerse a las tensiones comerciales –fundamentalmente, pero no solo, entre Estados Unidos y China– y la dilución del multilateralismo y la gobernanza global. Y se ve agravada por la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia que, además de dramáticas consecuencias para la vida y bienes de los ucranianos, tiene un extraordinario impacto directo sobre Europa, la Unión Europea y España. Y que lejos de contenerse puede, incluso, agravarse.

En esta situación, la Comisión Europea planteó, en marzo de 2020, la estrategia industrial “Un nuevo modelo de Industria para Europa” y, en mayo de 2021, su “Actualización del nuevo modelo de industria 2020: Construyendo un Mercado Único más sólido para la recuperación de Europa”, que incorpora las lecciones de la crisis, destacando la importancia de la industria para fortalecer la capacidad de resiliencia económica y acelerar la doble transición manteniendo y creando empleos.

La pandemia ha puesto de manifiesto las fortalezas, y evidenciado las deficiencias, de nuestra economía y nuestro sistema productivo. También ha mostrado los problemas de la dependencia externa en materiales básicos y acentuado la imperiosa necesidad de reforzar la base industrial europea y española.

“La pandemia ha puesto de manifiesto las fortalezas, y evidenciado las deficiencias, de nuestra economía y nuestro sistema productivo”

La Unión Europea, y España, han de desarrollar normativas conducentes a dotar de mayor resiliencia y robustez a la industria europea. Y desarrollar instrumentos para canalizar las inversiones que estimulen la competitividad de la industria, modernicen su tejido productivo, refuercen su capacidad de generar empleo de calidad, fomenten su eficiencia energética, impulsen su capacidad de innovación y apuesten por la transición hacia una economía circular que favorezca el cambio de hábitos y un comportamiento consciente de los consumidores.

Porque la industria española se enfrenta a nuevos retos y potenciales dificultades, como los problemas en las cadenas de suministro. Nos enfrentamos a la coyuntura inflacionista y las fuertes subidas de precios industriales y de productos finales que está ocasionando. Y las actuales tensiones geopolíticas en el este de Europa están sumando complejidad al contexto en el que se desenvuelve la industria y la economía en general y apelan a la máxima prudencia por parte de todos.

Ante esto, la entidad industrial europea y española se han situado en primera línea de prioridad y son un vector clave del plan europeo de recuperación económica, Next Generation EU, que facilita inversiones masivas para reforzar y acortar las cadenas de valor industriales y para reubicar de forma inteligente y estratégica la producción en Europa y en España, así como para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el próximo impulso de nuevos sectores industriales. Ello deberá acompañarse de las necesarias cualificaciones y capacidades en los recursos humanos para abordar tales cambios.

Este instrumento deberá ayudarnos a enfrentar el escenario actual, que suma a la guerra comercial (de la última administración Trump) una pandemia global (que además de millones de fallecidos ha supuesto la hibernación de nuestras economías y profundos cambios sociales y geoestratégicos) y, por último, hasta la fecha, una guerra con una potencia nuclear (y principal suministrador de los recursos energéticos y buena parte de algunas materias primas), que ha invadido un país soberano que era fuente de productos básicos y materias primas importantes para Europa.

Una Europa que, embarcada en un plan de recuperación, ha tomado importantísimas medidas económicas (junto con otros países de la comunidad internacional) en forma de sanciones y vetos sobre la Federación de Rusia, que agravarán las perspectivas económicas globales (fueran estas las que fueran).

“Los PERTE son uno de los elementos clave y más innovadores para materializar el apoyo a la industria y a la transformación de nuestro tejido productivo”

Apoyo y programas de impulso

En este marco coyuntural, y para contribuir a los objetivos expuestos, en particular, el fortalecimiento y mejora de la competitividad de la industria y la modernización de nuestro tejido empresarial, la Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) ha impulsado un instrumento de apoyo y acompañamiento: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) como esquema de colaboración público-privada para la transformación de nuestro modelo productivo.

Los PERTE son uno de los elementos clave y más innovadores para materializar el apoyo a la industria y a la transformación de nuestro tejido productivo. Se trata de un esquema basado en el concepto de los grandes proyectos de interés europeo (IPCEI) –que tanto éxito está teniendo a nivel de la UE en campos como las baterías, el hidrógeno o la microelectrónica– y que permite canalizar ayudas públicas para el desarrollo de un ámbito determinado, al que los interesados deben concurrir en forma de agrupación. El proceso se inicia con la determinación de los diferentes eslabones de las cadenas de valor que dan lugar al cumplimiento del objetivo determinado. Tras ello, y como se puede comprobar, por ejemplo, en las bases del PERTE VEC, se agrupan estos eslabones, atendiendo a su naturaleza, en bloques interconectados a los que deben concurrir las empresas de la agrupación.

Esta nueva concepción de ayudas públicas, que exige la cooperación efectiva entre empresas y el resto de los agentes en una cadena de valor de un sector determinado, es una palanca inmejorable para unir proyectos y consolidar a empresas de muy diferente tamaño, que tienen que trabajar juntas, aportando su experiencia y dimensión, en la definición y consecución de un objetivo como un todo conjunto y único: el proyecto tractor global.

“La financiación de estos proyectos debe favorecer un elemento que cada vez tiene más relevancia: la autonomía estratégica abierta a nivel nacional y europeo”

La financiación de estos proyectos debe favorecer un elemento que cada vez tiene más relevancia: la autonomía estratégica abierta a nivel nacional y europeo. Potenciar la soberanía industrial en el mercado interior, que es nuestra joya de la corona, para la seguridad, prosperidad y bienestar de nuestros ciudadanos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia actúa, pues, con una óptica coyuntural para afrontar las consecuencias de la pandemia, con la óptica de aprovechar los fondos Next Generation EU para afianzar cadenas de valor industrial en España con plena conexión europea y, cada vez con más relevancia, actúa robusteciendo nuestras capacidades industriales ante amenazas futuras. Y esperamos que deje un legado aún poco visible: el viraje definitivo de la política industrial española hacia proyectos estratégicos de masa crítica y alto impacto tecnológico y territorial.

Un **SALTO** en la **TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA** y **DIGITAL**



Paz Guzmán

Consejera Económica en la Representación de la Comisión Europea y miembro de la Recovery and Resilience Task Force / España

Europa ha ofrecido una respuesta contundente a la pandemia COVID-19, y así ha salido más fortalecida en su unión para hacer frente a los retos que plantea la actualidad, incluidos los derivados de la invasión rusa de Ucrania y la subida de precios de la energía.

En julio del 2020, la Unión Europea dio un paso nuevo en su historia y creó NextGenerationEU, un instrumento de apoyo fiscal a nivel europeo con una potencia del 5 % del PIB de la UE. Lo hizo de forma inteligente y valiente: incentivando la mayor transformación estructural de la economía europea que hayamos conocido y asegurando un alto nivel de inversión dirigido a acelerar la transición verde y digital. Con ello, la UE se ha convertido en el mayor emisor de bonos verdes del mundo. El fondo, dotado de 750 000 millones de euros (a precios de 2018), tiene en su corazón el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que financia con subvenciones y préstamos las inversiones y reformas acordadas con los Estados Miembros. El objetivo es mitigar el impacto de la pandemia y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España fue aprobado por el Consejo en julio del 2021 con una dotación de subvenciones no reembolsables de 69 512 millones de euros, casi un 6 % del PIB de España en el 2019. De aquí al 2026, España

“España ha aprobado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establece por ley el objetivo de neutralidad climática para 2050, incluyendo un sistema eléctrico 100 % renovable”

espera invertir 27 800 millones de euros en la transición climática con importantes inversiones en eficiencia energética, transporte sostenible, energía renovable, preservación de la biodiversidad y gestión de agua y residuos. España ha aprobado una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establece por ley el objetivo de neutralidad climática para 2050, incluyendo un sistema eléctrico 100 % renovable.

En el frente digital, se esperan inversiones por valor de 19 500 millones de euros en digitalización de la administración pública, en habilidades digitales e inclusión digital, en digitalización de la industria, en inteligencia artificial, ciberseguridad y en conectividad. El Plan también invierte en la resiliencia económica y social del país con el fin de reducir la alta tasa de desempleo –en particular el juvenil–, reducir la alta proporción de trabajadores con contratos temporales y atajar el bajo crecimiento de la productividad. Así, el plan invierte en fomentar sistemas educativos eficaces e inclusivos para reducir la tasa de



abandono escolar prematuro. Hay inversiones sustanciales para mejorar las capacidades de los trabajadores y para modernizar el sistema de educación y formación profesional.

El Plan aborda las recomendaciones específicas hechas a España por el Consejo en 2019 y 2020, que incluyen, entre otras, la necesidad de mejorar el desempeño del mercado laboral, reducir el abandono escolar, incrementar la capacidad de innovación y hacer que el gasto público sea más eficiente y sostenible. Algunos expertos estiman que el impacto en la economía de las reformas comprometidas podría ser claramente superior al de las inversiones.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia introduce la financiación por objetivos, que brinda transparencia y rendición de cuentas en el uso de la financiación. La Decisión de Ejecución del Consejo define un listado de 416 hitos y objetivos que España debe cumplir para recibir la financiación acordada en una serie de ocho desembolsos previstos hasta el 2026. Los hitos y objetivos nos permiten monitorear el progreso de las reformas e inversiones. Son claros, realistas y brindan a la administración pública, la sociedad civil y a los legisladores información sobre los propósitos de las inversiones y los resultados alcanzados. En definitiva, el instrumento ofrece un marco de financiación por resultados, que enriquece el sistema de finanzas públicas, favoreciendo evaluaciones *ex ante* de los programas de gasto, la definición de indicadores de desempeño, las evaluaciones *ex post* y revisiones de gasto de los principales programas. El Plan español adapta en gran parte esta filosofía de financiación por resultados al incluir medidas para hacer más eficiente y sostenible el gasto público. Las revisiones del gasto contribuirán a mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público español, lo que permitirá reorientarlo hacia un mayor crecimiento y un gasto más respetuoso con el medio ambiente y más

“En el frente digital, se esperan inversiones por valor de 19 500 millones de euros en digitalización”

orientado a la lucha contra el cambio climático.

Para que el Plan sea un éxito será necesaria la correcta implementación del mismo por parte de la administración pública, a todos sus niveles. El poder legislativo tiene también un rol importante con la aprobación de un elevado número de leyes que figuran como reformas en el Plan. También será necesaria la concurrencia positiva de sociedad civil y el sector privado. En particular, la aportación de inversión privada dará un carácter netamente transformador al Plan. La Comisión estima que, para financiar la transición a cero emisiones netas, la UE necesita una inversión de alrededor de 390 000 millones de euros cada año hasta el 2030, lejos de lo que la inversión pública puede aportar. Se necesita financiación privada para cerrar la brecha en la financiación. Además, el sector privado puede mejorar el marco regulatorio al participar en las consultas públicas y dar feedback sobre cómo se están desarrollando las convocatorias.

La efectiva implementación del Plan debería permitir a España dar un salto extraordinario en el camino de su transformación energética y digital, mejorar su capital humano y su desarrollo económico y social. La oportunidad de transformación existe, los instrumentos están en pie, los objetivos definidos. La invasión de Rusia de Ucrania, no hace más que reforzar la necesidad de implementar NGEU y acelerar la transición verde y digital en Europa.

La Comisión Europea apoyará sin duda alguna a España en este camino de recuperación y transformación de su economía.

LATINOAMÉRICA: una OPORTUNIDAD de ABORDAR una RECUPERACIÓN SOSTENIBLE e INCLUSIVA



Gema Sacristán

Directora General de Negocio de BID Invest / Estados Unidos

Todos nos vamos recuperando poco a poco. También América Latina. La pandemia impactó con fuerza en una región que, aunque venía de crecimientos aparentemente sólidos en términos nominales, en realidad no lo eran tanto a la vista de la rapidez con la que se desmoronó el castillo de naipes. El PIB de la región cayó un 6,8 % en 2020, según datos de la Cepal, lo que destrozó el tejido social y amplió más la histórica desigualdad económica y social.

Afortunadamente, y aunque el horizonte aún no está totalmente despejado, lo peor de la pandemia ha ido quedando atrás. América Latina creció un 6,3 % el año pasado gracias al empuje comercial, la subida en los precios de las materias primas y las mejores condiciones de financiación. Todo pintaba relativamente bien cuando, a finales del año pasado, afloraron las presiones inflacionistas, subieron los tipos de interés y volvieron los cuellos de botella a la cadena de suministro, algo que se ha intensificado desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Aunque el conflicto bélico añade más incertidumbre, nada en estos momentos hace presagiar que regresemos a una profunda recesión como la que estábamos remontando. Eso sí, la recuperación será más lenta de lo previsto y va a requerir de medidas adicionales para articular un crecimiento más sólido. Y solo puede ser más sólido si es sostenible e inclusivo y busca la colaboración público-privada como palanca aceleradora. Las crisis siempre han sido un importante detonador del cam-

“América Latina creció un 6,3 % en 2021 gracias al impulso del comercio, el aumento de los precios de las materias primas y la mejora de las condiciones de financiación”

bio. Yo estoy convencida de que la pandemia, si somos capaces de entender que estamos ante una oportunidad para cambiar la forma en que vivimos y trabajamos, y avanzamos de verdad a unos modelos económicos distintos, no va a ser una excepción.

Una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es que solos no llegaremos a ningún sitio; necesitamos ir juntos para poder abordar los grandes desafíos globales como son el cambio climático, la desigualdad económica y social, la brecha de género, la pobreza y el hambre, la accesibilidad a los servicios básicos... todos esos retos y objetivos que plasmamos en 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

América Latina no puede dejar pasar este tren, al que la digitalización ha dado más urgencia y velocidad. Pensemos por ejemplo en una de las deficiencias que sacó a la luz la pandemia: el escaso nivel de inversión en infraestructuras de salud y de educación en la región. No podemos quedarnos quietos. Ni en salud, ni

en educación, ni en otras infraestructuras de servicios básicos como carreteras, conexiones ferroviarias, puertos y aeropuertos, saneamientos, energía... todo aquello que impulsa y acompaña al desarrollo y vertebra el crecimiento de un país.

Pero tampoco podemos quedarnos atrás en igualdad de género e inclusión financiera. Lo primero vertebra la sociedad, al integrar económica, empresarial y socialmente a la mitad de la población, las mujeres. Y lo segundo, la inclusión financiera, es lo que permite pensar en el futuro y soñar con progresar, ya sea crear un pequeño negocio o simplemente financiar unos estudios, una vivienda mejor, otra oportunidad... Todas esas cosas que, en mayor o menor medida, van sumando y son relevantes para acabar con las bolsas de pobreza que aún tiene la región.

Y, por supuesto, no nos podemos quedar atrás en la lucha contra el cambio climático porque América Latina es una de las regiones más afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos que provoca el calentamiento del planeta. Tenemos poco que perder y muchísimo que ganar si avanzamos en el camino hacia la descarbonización completa de las economías, que tiene su primera etapa en el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

América Latina debe dar un paso al frente para capturar íntegramente esta oportunidad. Y ese paso al frente requiere de decisión y de una visión holística que permita pasar de medidas defensivas y con objetivos cortoplacistas a una agenda de crecimiento sostenible e inclusivo. Y eso precisa de la imprescindible colaboración entre el sector privado y el sector público. Sí, imprescindible, porque ni las políticas monetarias –que deben ser restrictivas para contener la inflación– ni las políticas fiscales –sin apenas margen de maniobra tras el fuerte endeudamiento público estos años de crisis

“Es necesario buscar el apoyo del sector privado para afrontar conjuntamente los grandes retos que tenemos por delante”

y pandemia– van a poder emplearse a fondo, o al menos como se precisa, en el crecimiento sostenible e inclusivo. Es necesario buscar el concurso del sector privado para, conjuntamente, poder hacer frente a los grandes retos que tenemos delante y que, como decía antes, no podemos resolver en solitario. La lección aprendida en la pandemia con las vacunas nos marca el camino.

La colaboración público-privada ayudaría también al mundo a recuperar la confianza, algo que para América Latina es uno de los problemas más acuciantes, como destacaba el informe del BID *La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y Caribe*. Más transparencia, instituciones más sólidas, menos burocracia, más compromiso social, más productividad, menos desigualdades, más emprendimiento, más educación, más inclusión financiera, más diversidad, más y mejor gobernanza... Los países que destaquen en estos frentes no solo levantarán más rápido el vuelo, sino que forjarán unos cimientos sólidos, unas raíces tan profundas y arraigadas que será muy difícil que puedan ser fácilmente vapulteadas y arrancadas.

Eso es lo bueno de esta oportunidad. Que lo que se avanza, se consolida y empuja a avanzar más, haciendo más difícil dar pasos atrás.

AMÉRICA LATINA en un MUNDO POSCOVID



José Ignacio López

Director general ejecutivo y jefe de Investigación Económica en Corficolombiana / Colombia

América Latina fue una de las regiones más afectadas por la pandemia. En términos de salubridad, la región acumula el mayor número de defunciones asociadas a la COVID-19, con Perú encabezando la infortunada lista a nivel global con una tasa cercana a 6 400 fallecimientos por millón de habitantes. En materia económica América Latina también fue la región que salió peor librada al registrar una caída de la actividad económica de 6,9 % en 2020. Las medidas no farmacológicas implementadas para combatir la pandemia, como cuarentenas y restricciones a la movilidad, tuvieron un efecto devastador en la economía de la región caracterizada por una alta informalidad laboral y una red de protección social insuficiente.

La región experimentó una importante recuperación económica en 2021 de la mano de las campañas de vacunación en diferentes países que permitieron retomar niveles de actividad similares a los de prepandemia en algunos sectores. No obstante, la normalización de la actividad económica dista de ser completa y hay una importante heterogeneidad entre países. Chile y Colombia, por ejemplo, alcanzaron a finales de 2021 niveles de actividad económica superior a los de prepandemia en 4,9 % y 2,8 %, respectivamente. Por su parte, Perú y Brasil exhiben una tasa de recuperación ligeramente positiva con una tasa bianual en 2021 frente a 2019 de 0,9 % y 0,6 %, en su orden. México, Perú, Bolivia y Argentina todavía se encuentran con niveles de producción inferiores a los de prepandemia.

“Chile y Colombia alcanzaron a finales de 2021 niveles de actividad económica superior a los de prepandemia en 4,9 % y 2,8 %, respectivamente”

En este contexto, y bajo el supuesto que la pandemia ya ha iniciado su transición a endemia, América Latina se enfrenta a un número importante de retos en el mundo pos-COVID. El más urgente tiene que ver con el aumento acelerado de los precios a los consumidores. De acuerdo con las encuestas más recientes, los analistas económicos esperan una inflación para América Latina de 7,8 % para finales de este año, un aumento significativo frente a la cifra de 3,5 % prepandemia. Este aumento de la inflación, que inicialmente tuvo origen en un desbalance entre oferta y demanda global, pero ahora se ha exacerbado por el conflicto bélico en Europa, podría poner en riesgo la recuperación económica de la región y ampliar la pobreza.

El choque en las materias primas y energéticos asociado al conflicto en Ucrania está elevando de manera importante los precios de los alimentos, que son los que más pesan en la canasta de consumo de los hogares más vulnerables. La región tuvo un retroceso importante en la lucha contra la pobreza debido a la crisis económica en 2021 con un aumento de 30 millones de personas que viven con bajos ingresos y una tasa de pobreza extrema que

después de alcanzar niveles mínimos de 8,7 % en 2010 retrocedió a niveles de 13,8 %.

El aumento de la inflación a nivel global y el subsecuente aumento de tasas de interés en muchas jurisdicciones, generará una presión adicional en las cuentas fiscales de los gobiernos de la región que también sufrieron un revés importante durante la pandemia por cuenta de unas mayores necesidades de gasto público y un menor recaudo.

Con un menor espacio fiscal, los gobiernos de la región tendrán que fortalecer sus ingresos tributarios sin afectar la recuperación económica mediante impuestos progresivos, y aprovechar el auge asociado a los mayores precios de las materias primas exportadas. Los mayores precios del petróleo y del cobre pueden ayudar a estabilizar las cuentas fiscales de la región y la sostenibilidad de los programas sociales si son aprovechados de manera eficiente.

La región también debe mejorar sus arreglos institucionales en cuanto a las asociaciones público-privadas para continuar con los programas de inversión pública en un contexto de recursos limitados. El caso exitoso en materia de asociaciones público-privadas en el sector de infraestructura de Colombia debe ser un modelo que puede y debe ampliarse a otras dimensiones y países. Esto podría reducir los costos logísticos y mejorar la eficiencia en materia de transporte, almacenamiento y distribución de bienes. Políticas enfocadas en estos aspectos pueden instrumentarse para tener ganancias de eficiencia que permitan amortiguar la presión inflacionaria asociada al mayor costo de los insumos, en particular si se enfocan en el sector agrícola.

“Los analistas económicos esperan una inflación para América Latina de 7,8 % para finales de este año, un aumento significativo frente a la cifra de 3,5 % prepandemia”

En la misma línea, generar un ambiente regulatorio apropiado que incentive la innovación y la transformación digital debe ser una prioridad, en el actual contexto, para que la región siga mejorando en materia de inclusión digital y de esta manera avanzar en materia de profundización financiera para que las familias tengan más herramientas a la hora de suavizar choques adversos a sus ingresos como consecuencia del aumento de los precios a los consumidores.

Finalmente, en esta coyuntura desafiante, la región debe buscar fortalecer sus redes de protección social con programas que sean efectivos en la protección de los más vulnerables y que al mismo tiempo generen los incentivos a la inserción de dichos hogares a la formalidad mediante una mejora de los programas de transferencias condicionadas que contemplen incentivos a la acumulación de capital humano.



El **POTENCIAL ARGENTINO** para el **DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE**



Matías Kulfas

Ministro de Desarrollo Productivo de Argentina / Argentina



Daniel Schteingart

Director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) / Argentina

Argentina es un país con un enorme potencial para el desarrollo económico y social sostenible, asentado en su acervo de capacidades tecnológicas y productivas, dotación de recursos naturales, trabajadores y trabajadoras y sistema educativo. Lamentablemente, ese potencial no ha sido plenamente aprovechado y el país atravesó sucesivas crisis económicas, inestabilidad y carencias de visiones de largo plazo que limitaron ese desarrollo.

Hoy Argentina es un país de desarrollo intermedio, que viene de atravesar una doble crisis: una crisis macroeconómica iniciada en abril de 2018 con una fuerte salida de capitales financieros que dejó en evidencia un profundo sobreendeudamiento del sector público, y la crisis emergente a partir de la pandemia de la COVID-19.

Esta doble crisis nos ha llevado a redoblar los esfuerzos. Por una parte, para trabajar en el ordenamiento de la crisis macroeconómica heredada, destacando las acciones del Ministerio de Economía en la reestructuración de la deuda con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional. Dicha reestructuración permitió, por un lado, recuperar la sostenibilidad de la deuda con los acreedores privados y generar un ahorro de 37 700 millones de dólares para el país y, con el FMI, acordar un plan de facilidades

“El Plan Argentina Productiva 2030 procura planificar el desarrollo productivo, industrial y tecnológico para lo que resta de la década”

extendidas que permita ordenar la macroeconomía sin realizar ajustes del gasto real. Por otra parte, los graves efectos de la crisis de la COVID-19 llevaron al despliegue de un paquete de asistencia inédito, que implicó en 2020 un esfuerzo fiscal y de movilización de recursos financieros equivalente a alrededor del 7 % del PIB, gran parte de la cual la explica el pago de salarios a las empresas del sector privado en crisis (vía programas como el de Asistencia al Trabajo y la Producción y, luego, el de Recuperación Productiva), las transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables, que fueron los más afectados por la reducción de la movilidad derivada de la pandemia (a través de lo que se conoció como el Ingreso Familiar de Emergencia) y la ampliación del financiamiento para garantizar la liquidez de las empresas y trabajadores y trabajadoras autónomos.

El inédito paquete de ayuda al sector productivo durante 2020 –que en 2021 continuó, aunque con menor volumen, habida cuenta

“Los recursos presupuestarios destinados a las políticas de desarrollo pasaron de 155 millones de dólares en 2019 a unos 1 443 millones de dólares en 2021”

de la mejora en la situación económica– fue crucial para evitar una catástrofe en materia productiva y laboral. Gracias a ello, una vez pasado el peor momento de la pandemia, la economía recobró una acelerada senda de recuperación, motorizada particularmente por la industria y, también, por el complejo agropecuario, la energía, la minería, la construcción y los servicios basados en el conocimiento como el software. Tal recuperación permitió que a fines de 2021 la economía argentina no solo hubiera recuperado lo perdido en la pandemia, sino también en buena parte de 2018 y 2019. Durante el cuarto trimestre de 2021, el PIB fue 3,4 % más elevado que en el mismo período de 2019, con un marcado protagonismo de la inversión productiva, que creció 29,5 % en términos reales, una de las mayores recuperaciones a nivel mundial. Gracias a la mejora económica, la tasa de desocupación – que había tocado el 13 % en el peor momento de la pandemia– se redujo al 7 % en el cuarto trimestre de 2021, la menor en más de cinco años. La mejora del desempleo no se produjo por el efecto desaliento de quienes buscan empleo y no lo encuentran, sino por genuina creación de empleos.

Esta fuerte mejora registrada a lo largo de 2021 fue posible gracias a la mitigación de daños que se hizo en 2020, pero también gracias al notorio avance de la campaña de vacunación (que en Argentina alcanzó niveles muy elevados para la media mundial, con más del 90 % con una dosis y más de 80 % con esquema completo), y al fuerte peso que ad-

quirieron las políticas de desarrollo productivo dentro de la agenda gubernamental.

Los recursos presupuestarios destinados a las políticas de desarrollo productivo tuvieron un salto notable desde 2019, pasando de \$7 519 millones en ese año (unos 155 millones de dólares de ese año) a \$134 975 millones en 2021 (unos 1 443 millones de dólares). Ese notable incremento de los recursos permitió recuperar instrumentos cruciales de la política productiva, como el financiamiento accesible al sector productivo. Para ello, se potenciaron dos herramientas cruciales: el Fondo de Garantías (el FOGAR) y el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP). Mientras que el primero permite que el Estado oficie de garante ante la banca para que una PyME pueda acceder al crédito (algo relativamente dificultoso en Argentina), el segundo es fundamental para poder subsidiar líneas de crédito para la inversión de largo plazo. Gracias a estas herramientas, en 2020-2022 se otorgaron créditos a más de un millón de personas físicas y jurídicas, 250 veces más que en 2019. Gracias a estas herramientas, el crédito en valores constantes alcanzó a fines de 2021 el mayor nivel desde el año 2018, y la participación de las PyMEs en el crédito en moneda local superó el 50 %, la mayor marca en lo que va del siglo XXI.

Además de la recuperación del crédito productivo, la política industrial tuvo otras herramientas, entre las que se destacan el financiamiento para los parques industriales y tecnológicos (una herramienta de ordenamiento territorial que además es importante para el desarrollo productivo en un país con grandes asimetrías regionales como Argentina), el impulso al desarrollo de proveedores (a través del financiamiento a empresas que presenten proyectos de inversión para ser proveedoras de ciertas cadenas estratégicas, tales como energía, minería, transporte o salud, entre otras), el fomento a la economía del

conocimiento (a través de la sanción de una nueva ley de promoción para el sector, que incluye a los servicios informáticos, de I+D, la nano y biotecnología, la industria satelital y aeroespacial, entre otras), la formación de la población en pensamiento computacional (a través del curso gratuito Argentina Programa para aprender a programar, que contó con un interés inédito de la población, con más de 700 000 inscriptas en la instancia inicial) y la reducción de los impuestos a la exportación en los bienes manufacturados finales (que llegaron al 0 %).

Los resultados de la implementación de estas políticas mostraron sus frutos: en 2021, la industria manufacturera creció 7 % contra 2019, siendo una de las recuperaciones más veloces del mundo. En tanto, la economía del conocimiento no ha parado de batir récords mes a mes: su principal motor, el software, incrementó en 19 % su dotación de trabajadores y trabajadoras formales entre fines de 2019 y fines de 2021.

Pero más allá de la administración de las vicisitudes de la coyuntura –muy marcada por el daño de la pandemia–, la actual gestión ha puesto un gran esfuerzo en pensar el futuro del país, abriéndose a nuevas agendas y a la planificación para el resto de la década. Por primera vez en Argentina, la dimensión ambiental y de género han pasado a ser ejes estructurantes de la gestión de las políticas productivas. En julio de 2021, hemos puesto en marcha el Plan de Desarrollo Productivo Verde, que consta de una serie de herramientas para posicionar a la Argentina como un jugador activo de la transición energética global, al incentivar la economía del hidrógeno bajo en carbono y el desarrollo de proveedores de las energías limpias. También, desde el año 2020 se conformó un Gabinete de Género dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, con más de 50 iniciativas con perspectivas de

género, como por ejemplo diversas líneas de financiamiento para proyectos productivos liderados por mujeres. Asimismo, hemos trabajado en la elaboración de proyectos normativos para la creación de nuevos sectores productivos en Argentina, tales como el cannabis medicinal, la movilidad eléctrica y la industria 4.0, todos con un enorme porvenir.

Recientemente, en marzo de 2022, hemos dado inicio al Plan Argentina Productiva 2030, que procura ser planificar el desarrollo productivo, industrial y tecnológico para lo que resta de la década. El Plan toma la idea de “políticas orientadas por misiones” –elaborada por la economista italo-estadounidense Mariana Mazzucato y hoy muy en boga en diversas partes del mundo– y propone movilizar el aparato productivo, científico y tecnológico para resolver desafíos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales del siglo XXI, que van desde el calentamiento global a la salud de la población, pasando por la digitalización, el empleo formal y la generación de divisas. Una de esas diez misiones será la duplicación de las exportaciones a 2030. Las exportaciones son la principal fuente de divisas genuina en una economía como la Argentina, en donde casi todas las crisis económicas de las últimas ocho décadas se generaron por problemas en la balanza de pagos.

Otra misión será el desarrollo de la economía verde para acelerar la transición hacia la sostenibilidad ambiental, ampliando y reforzando el Plan de Desarrollo Productivo Verde, a través del impulso creciente a la economía del hidrógeno, los proveedores industriales nacionales de las energías limpias, la eficiencia energética, la economía circular y la fabricación nacional de vehículos eléctricos.

Otras misiones se centrarán en el impulso a la producción nacional para la salud (vacunas, ensayos clínicos, cannabis medicinal,

equipamiento médico, biosimilares, telemedicina), en la adaptación de la producción de alimentos al siglo XXI (a partir de que nuestro agro se vuelva más resiliente ante el cambio climático y a partir de una mayor producción de proteínas y alimentos saludables), en el equipamiento de nuestras fuerzas armadas con tecnologías nacionales (drones, buques, satélites y prendas de seguridad, por ejemplo) y en la modernización de nuestros sectores industriales tradicionales (para incentivar una mayor productividad y una mayor creación de empleo registrado).

“Argentina viene experimentando un creciente dinamismo inversor en la minería, particularmente en lo que concierne al litio y el cobre”

El Plan Productivo también tendrá una misión específica para incentivar la digitalización del aparato productivo y la industria 4.0. El desarrollo de la minería, con estrictos cuidados ambientales, es otra de las diez misiones que impulsa el Plan. La minería es una actividad muy subaprovechada en Argentina (con exportaciones que no llegan a ser la décima parte que las de Chile, con quien Argentina comparte la Cordillera de los Andes) y que va a tener una demanda creciente habida cuenta de que la transición energética demandará cada vez más minerales. Argentina viene experimentando un creciente dinamismo inversor en la minería, particularmente en lo que concierne al litio y el cobre. La industrialización de nuestro sector primario también será considerada estratégica, a partir del desarrollo

de proveedores industriales en la minería, los hidrocarburos, la pesca, el agro y el sector forestal. De esta manera, se apuesta a incrementar el empleo indirecto, el desarrollo tecnológico y la generación de divisas ligadas a nuestras actividades primarias, que además son fundamentales para descentralizar la actividad productiva, hoy demasiado concentrada en la región metropolitana de Buenos Aires.

Argentina está saliendo de la crisis de la pandemia y, también, de la que dejó el gobierno que nos antecedió. Y para ello es clave pensar y planificar el futuro de largo plazo. Por eso el Plan Argentina Productiva 2030. Porque queremos una Argentina desarrollada y con progreso para cada uno de sus habitantes, año tras año. Porque queremos una Argentina integrada inteligentemente al mundo, que pueda aprovechar las nuevas oportunidades derivadas de los desafíos globales del siglo XXI: cambio climático, economía del conocimiento, crecimiento de las clases medias emergentes. Argentina tiene un enorme potencial y somos muy optimistas de que en los años que siguen empezará a materializarse, con resultados visibles para cada una y cada uno de los habitantes de este país.

Una **RECUPERACIÓN ECONÓMICA SINUOSA: OPTIMISMO** y **AMENAZAS EXTERNAS**



Andrea Villarreal

Directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca) y docente de Entorno Económico y Macroeconomía en el IDE Business School / Ecuador

Todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un golpe en la cabeza. Esta famosa frase de Mike Tyson parece resonar una y otra vez en estos tiempos de incertidumbre y amenazas externas. Primero, la COVID-19 tergiversó la economía mundial y puso de rodillas a las cadenas mundiales de valor, la política económica, los precios de los commodities, etc. Fue un shock de oferta y demanda que pocos lograron esquivar. La respuesta a nivel mundial vino de la mano de estímulos fiscales –para los países que pudieron hacerlo– una política monetaria expansiva y paquetes de ayuda, trayendo consigo consecuencias de largo plazo que aún están por descubrirse.

Luego del punto más alto de la emergencia sanitaria, algunas economías lograron crecer, sin llegar todavía a recuperar aún sus niveles prepandemia. Sin embargo, la incertidumbre regresó a finales de 2021 por el brote de nuevas variantes. Un breve vislumbre de recuperación se volvió a desacelerar a inicios de 2022, con los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania. La ansiada recuperación, aunque aún visible, no será sin un alto grado de resiliencia para los planes de cualquier nación, empresa o gobierno, y el escurridizo crecimiento tendrá que asentarse en pilares sólidos para no volverse a derrumbar.

Sin duda, no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo y mucho menos en entornos cambiantes como los actuales. En Ecuador, un país donde por mucho

“El Banco Central del Ecuador espera que la inversión aumente 4,9 % en 2022 impulsado por una mayor inyección de capitales en los sectores petrolero y minero”

tiempo se enviaron las señales equivocadas al mundo, se ahuyentó la inversión, se amenazó con no pagar las deudas y de hecho se las incumplió, hoy se ofrece un panorama diferente encaminado a recuperar la credibilidad nacional e internacional, así como generar un marco que abra la puerta a transformaciones en materia económica y financiera.

Desde una perspectiva económica y, dadas las limitaciones que tiene Ecuador respecto a su política monetaria –la moneda oficial es el dólar americano, por lo que no es posible imprimir dinero para dinamizar la economía– hay cuatro factores que están potenciando la recuperación económica de Ecuador en 2022: la evolución del crédito, el precio del petróleo, el acceso a financiamiento externo, y la atracción de inversiones.

El rol del crédito en la recuperación

La dinamización del crédito en 2021, que se aceleró cuando las actividades económicas

“Ecuador cerró febrero 2022 con una inflación anual del 2,71 %, mientras que Perú lo hizo en una del 6,1 %, y Colombia en 8 %, la mayor del último lustro”

podieron reabrir, es una de las principales razones para el mejor desempeño económico alcanzado en 2021 y las expectativas de este año. En este contexto, más de 6,9 millones de nuevas operaciones de crédito fueron desembolsadas por la banca privada entre enero y diciembre de 2021, esto es, un 13 % más que en 2020 (790 000 operaciones adicionales).

En este periodo, la banca colocó 25 551 millones de dólares en nuevos créditos, lo que representa un incremento de 9 % frente a 2020 (2 116 millones adicionales), de acuerdo con las cifras oficiales. Estas cifras evidencian el apoyo del sector bancario al país en el proceso de recuperación. Colocar nuevos créditos a los sectores productivos y a las familias ecuatorianas ha permitido mantener y ampliar negocios, generar más empleo, dinamizar la productividad y apalancar la recuperación económica. Además, siete de cada diez dólares de nuevos créditos entregados entre enero a diciembre de 2021 se destinaron a los sectores productivos (microcrédito, vivienda, empresas y PYMES).

En los dos primeros meses de 2022, los nuevos créditos crecen a un ritmo de 21 % anual y el crédito que mayor crecimiento presenta es el microcrédito con un incremento de 50 %. A dos años del inicio de la pandemia, la banca privada ecuatoriana se encuentra sólida y continúa acompañando la reactivación a través de la colocación de créditos, lo que ha contribuido a la recuperación de la pro-

ducción, generación de empleo y reactivación del consumo en el país.

Precio del petróleo

Los precios de petróleo mantienen una expectativa al alza debido a los recientes acontecimientos en Ucrania, manteniendo el barril por encima de los 100 dólares. Para Ecuador esto tiene dos caras. Por un lado, significa mayores ingresos para el Presupuesto del Estado, pero, por otro lado, tiene un efecto con el encarecimiento de derivados de petróleo y otros productos. Ecuador cerró febrero 2022 con una inflación anual del 2,71 %, mientras que Perú lo hizo en una del 6,1 %, y Colombia en 8 %, la mayor del último lustro. Es vital mencionar que el país debe aprovechar la coyuntura del precio de petróleo, pero anticipar una transición energética progresiva hacia renovables.

Acceso a financiamiento

La posibilidad de volver a los mercados internacionales con emisión de bonos significa para el país la opción de tener fuentes adicionales de recursos para el financiamiento de obras y proyectos. La última vez que Ecuador emitió bonos soberanos fue en septiembre de 2019. La aprobación de cambios normativos en materia tributaria, inversión y empleo, así como cumplir con el acuerdo con el FMI y las acciones tomadas en materia de reformas plantean un escenario favorable para retornar a los mercados potencialmente en 2023.

Inversión

El Banco Central del Ecuador espera que la inversión aumente 4,9% en 2022 impulsado por una mayor inyección de capitales en los sectores petrolero y minero. Para lograrlo se

plantean varios mecanismos para fortalecer la inversión, que al segundo trimestre de 2021 alcanzó solo el 1,1 % del PIB.

Se espera que la Asamblea apruebe el proyecto para atraer inversiones que pretende reformar la Ley de Alianzas Público-Privadas, mejorar el marco normativo para las zonas francas y dinamizar el mercado de valores. Otra estrategia para atraer inversiones es la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas, pasando del 5 % al 4 %. Otra meta es alcanzar mayor apertura a la inversión privada en el sector petrolero. Se prevé delegar contratos de participación, donde la empresa privada invertiría a cambio de obtener un porcentaje de la producción petrolera.

Finalmente, Ecuador busca concretar 10 tratados con mercados considerados estratégicos. El más cercano es un acuerdo con México para formar parte de la Alianza del Pacífico en 2022. Pese a estos cuatro elementos favorables, Ecuador tiene grandes retos que navegar en 2022. A nivel interno, es imperativo alcanzar los acuerdos necesarios para la gobernabilidad del país. En materia externa, el reto más latente es el impacto del conflicto bélico que deja secuelas para todos. En el caso ecuatoriano se traduce en menores exportaciones de banano, camarón, flores, pescado y café que en 2021 representaron 1 129 millones de dólares para la zona afectada (Rusia, Ucrania, Armenia, Kazajistán y Kirguistán). También el impacto se observa por el encarecimiento de importaciones de materias primas agrícolas principalmente de abonos y fertilizantes, ya que el 38 % de estos productos se importaron desde Rusia en 2021. Además, con la apreciación del dólar, el país tendrá menor competitividad en mercados internacionales.

“El impacto se observa por el encarecimiento de importaciones de materias primas agrícolas principalmente de abonos y fertilizantes, ya que el 38 % de estos productos se importaron desde Rusia en 2021”

La economía ecuatoriana, al igual que muchas otras, deberá estar preparada para sortear obstáculos en un camino sinuoso y, a pesar de contar con buenas perspectivas, buscar alternativas ante un entorno cambiante.

¿CUÁL es tu MISIÓN?



Jordi Sevilla

Senior Advisor, miembro del Consejo Asesor y Director del Área de Contexto Económico de LLYC / España

A estas alturas del siglo XXI algunas cosas sabemos ya. En especial, que vivimos en un mundo complejo, con dinámicas cargadas de cisnes negros y problemas que desbordan a los Gobiernos nacionales pero que tampoco el mercado, ni el sector privado, son capaces de resolver por sí solos. La única certeza que podemos esgrimir es que casi todo lo aprendido en el siglo XX ha quedado arrinconado ante unas evoluciones sociales, tecnológicas y naturales que trascienden lo conocido.

La globalización, el cambio climático y la Inteligencia Artificial son tres vectores de cambio lo suficientemente potentes por sí mismas, y en su interrelación, como para explicar esta nueva situación en la que lo viejo no sirve y lo nuevo está naciendo. Nunca como ahora los seres humanos nos hemos tenido que enfrentar a desafíos tan disruptivos y generales que nos afectan directamente como especie hasta el punto de hacernos cuestionar el propio sentido de nuestro ser. Frente a eso, las políticas públicas tradicionales o el viejo nacionalismo son inocuos, por más familiares que nos resulten: ni las pandemias, ni el cambio climático, ni la posibilidad real de un transhumanismo, ni la conciencia de que se puede superar el hambre y la desigualdad extrema en el mundo encajan en los esquemas clásicos de público/privado. Frente a esos problemas, ni el estado es el problema y el mercado la solución, ni lo contrario.

Hace falta encontrar nuevos protagonistas y diseñar nuevas formas de intervenir en lo social capaces de hacerles frente a unos retos que son, a la vez y por primera vez, globales y

“ Si los gobiernos establecen normas y procedimientos para separar los residuos y la basura, pero cada uno de nosotros, individualmente, no lo hacemos en nuestra casa, de poco servirá ”

transversales. En puridad, lo único plenamente rescatable de la doctrina del siglo XX serían los derechos humanos proclamados por la ONU, aplicados hasta sus últimas consecuencias, en un momento en que la especie humana se solapa con el individuo como sujeto histórico.

El siglo XXI inició su viaje por la historia empujado por cuatro vientos: la globalización como método para entrelazar los intereses de las naciones poniendo fin a las guerras y a la pobreza; la digitalización como revolución capaz de crear y anudar un mundo único gracias al empuje unificador de la misma tecnología; la desregulación, el mercado capaz de equilibrarse por sí mismo, sin crisis y la preferencia por el estado mínimo, como piezas del edificio social inductor del crecimiento; y, por último, la convicción de que la lucha contra el cambio climático se había puesto en marcha a partir de la aprobación del Protocolo de Kioto de 1997 con el acuerdo de 81 países.

En apenas 20 años, los cuatro vientos han descabalgado. Ha sido de la mano, en 2008, de una crisis de los mercados financieros desregulados de la que nos sacó el estado como rescataador; de la tecnología de los datos invasiva de

la privacidad y el capitalismo de vigilancia; del resurgimiento de los bloques –no solo tecnológicos, sino políticos– en torno a Estados Unidos y China, con la incorporación reciente de Rusia tras la guerra de Ucrania que ha provocado su exclusión del sistema económico mundial y, finalmente, de la constatación de que, a pesar de declaraciones enfáticas como al Acuerdo de París (2015) estamos lejos de reducir las emisiones de CO2 al nivel exigido, a la vez que se evidencian vínculos entre acciones humanas como la deforestación y el surgimiento de pandemias como la COVID-19 por mayor probabilidad de que los virus animales salten a los humanos.

Necesitamos un nuevo paradigma que permita entender lo que ocurre y, sobre todo, un nuevo esquema de actuación social que sea eficaz a la hora de hacerle frente cuando se han roto las relaciones tradicionales entre público y privado, individual y colectivo. Los métodos actuales de gestión son inadecuados para abordar los retos del siglo XXI. Dos ejemplos servirán para evidenciar este punto.

Por un lado, el desafío a la especie humana planteado por las posibilidades abiertas por la Inteligencia Artificial no cabe en los esquemas clásicos de estado-empresas porque va más allá de los objetivos y funciones conocidos de ambos agentes. Si las empresas están derivando desde el accionista como único objetivo al capitalismo de stakeholders, los estados deben modernizar sus estructuras y funciones para encajar con las nuevas responsabilidades exigidas.

Por otro lado, si los gobiernos establecen normas y procedimientos para separar los residuos y la basura, pero cada uno de nosotros, individualmente, no lo hacemos en nuestra casa, de poco servirá. Así, las responsabilidades público/privadas e individual/colectivas, tienen que ensamblarse de manera diferente frente a los nuevos desafíos y tanto los gobiernos como las empresas deben revisar su propósito y su gobernanza corporativa.

Y ahí es donde cobra todo el sentido la nueva propuesta de la Unión Europea, inspirada en la profesora Mariana Mazzucato, de ordenar las prioridades colectivas y organizar las estrategias y los recursos empleados en torno al concepto de “Misiones” que pone fin, de manera brillante, al clásico de “Asuntos Públicos” como el espacio tradicional para organizar las relaciones entre lo público y lo privado. Hoy, tanto lo público como lo privado son responsabilidad de todos, porque nadie, por sí solo, es capaz de hacerle frente. Lo hemos visto con la pandemia que ha puesto en marcha la cooperación entre gobiernos y empresas a unos niveles desconocidos, a la vez que se apelaba, además de a las normas (restricciones), a la responsabilidad individual para cumplirlas.

El gran descubrimiento político del siglo XXI está siendo que el valor social surge de la interacción entre los sectores públicos y privados y la sociedad civil, gestionados de manera diferente, con propósitos compatibles y creando conjuntamente beneficios mutuos. Según define la Comisión Europea, las misiones son un instrumento nuevo y ambicioso que parten de la idea de que los desafíos complejos exigen activar esfuerzos coordinados entre gobiernos, así como entre gobiernos y empresas e individuos, en torno a objetivos claros, capaces de movilizar los recursos necesarios para transformar la sociedad.

Organizar la gestión de lo social en torno al concepto de misiones exige cambios importantes en la manera de gestionar lo público y lo privado, así como sus relaciones tradicionales para entrar en una nueva dinámica más allá de los viejos conceptos y actuaciones de lobby o de asuntos públicos. Surge un nuevo espacio de interrelación para gobiernos, empresas y sociedad civil, donde deben cooperar en lugar de confrontar, como era lo tradicional.

Quien asuma facilitar este encuentro, con el enfoque de “misión”, prestará un gran servicio a la colectividad. Uno a la altura del siglo XXI.



Premios

Revista UNO



COMMUNICATOR AWARDS 2020
en la categoría
Writing



INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 2020
Best House Organ (internal publication)
for General Audience



SILVER WINNER
en la categoría
Best House Organ

EIKON

EIKON DE PLATA 2016
en la categoría *Publicaciones*
Institucionales - Multimedia



2016 AWARD OF EXCELLENCE
en la categoría
Websites - Magazine



SILVER WINNER
en la categoría
Design - Illustration



GRAND WINNER
Best of Magazines
Overall Presentation



GOLD WINNER
en la categoría
Best House Organ

